



LATIN
AMERICAN
STUDIES
ASSOCIATION

FORUM

FALL 2020

51:4



LASA2021

**Crisis global, desigualdades
y centralidad de la vida**

MAY 26 - 29, 2021
VANCOUVER, CANADA

Hybrid Congress (on-site and virtual)

IN THIS ISSUE

1 **From the president /
De la presidenta de LASA**

por Gioconda Herrera

DOSSIER: ECOS DE LA PROTESTA SOCIAL

4 **“Nos quitaron hasta el miedo”: Los
feminismos en la revuelta social chilena**

por Luna Follegati Montenegro

11 **La protesta social de 2019 y la juventud:
El octubre ecuatoriano**

*por María Moreno Parra, Alex Amézquita Ochoa y
Angélica Mejía*

17 **21N: El desborde de la movilización
en Colombia**

*por Mauricio Archila, Martha Cecilia García, Santiago
Garcés y Ana María Restrepo*

24 **“¿Dónde está el dinero de PetroCaribe?”
Protestas en Haití**

por Handerson Joseph

NEWS FROM LASA

29 **Proposed Changes to the
LASA Constitution and Bylaws**

30 **The Latin American Studies Association:
Financial Overview**

IN MEMORIAM

38 **María Lugones, feminista descolonial,
diaspórica y peregrina**

*por Mariana Favela, R. Aída Hernández Castillo, Verónica
López Nájera, Margara Millán, Mariana Mora y Meztli
Yoalli Rodríguez*

42 **Rememorando a María Lugones**

por Sylvia Marcos

44 **Ivan Schulman, hispanista de raigambre
martiana**

por Pedro Pablo Rodríguez

President

*Gioconda Herrera
Facultad Latinoamericana
de Ciencias Sociales
(FLACSO) Ecuador*

Vice President- President Elect

*Gerardo Otero
Simon Fraser University*

Past President

*Mara Viveros-Vigoya
Universidad Nacional de
Colombia*

Treasurer

*María Josefina Saldaña-
Portillo
New York University (EE.UU.)*

EXECUTIVE COUNCIL

For term ending May 2022

*Antonio Sérgio Guimarães
University of São Paulo*

*Dara Goldman
University of Illinois at
Urbana-Champaign*

*Veronica Schild
University of Western Ontario*

*STUDENT REPRESENTATIVE
Joseph Torres González
City University of New York
(CUNY)*

For term ending May 2021

*Clara Arenas
Asociación para el Avance
de las Ciencias Sociales en
Guatemala (AVANCSO)*

*Claudia Mosquera Rosero-
Labbé
Universidad Nacional de
Colombia*

*Suyapa Portillo-Villeda
Pitzer College (EE.UU.)*

EX OFFICIO

Program Co-Chair

*Liliana Rivera
Centro de Estudios
Sociológicos de El Colegio
de México*

Program Co-Chair

*Ulla Berg
Rutgers University*

Executive Director

Milagros Pereyra-Rojas

Editor of LARR

*Aníbal Pérez-Liñán
University of Notre Dame*

Editors of Latin America Research Commons (LARC)

*Florencia Garramuño
Universidad de San Andrés*

*Philip Oxhorn
Vancouver Island University*

Strategic Plan Oversight Committee

*Gilbert Joseph
Yale University*

*Timothy Power
University of Oxford*

*Catalina Romero
Pontificia Universidad
Católica del Perú*

LASA STAFF

Administration

Executive Director

Milagros Pereyra-Rojas

Operations

Director of Operations

Lazaros Amanatidis

Sections and Congress

Logistics Coordinator

Chisselle Blanco

Administrative Assistant

Roxana L. Espinoza

Communications

Director of Communications and Marketing

Vanessa Chaves

Graphic Designer

Jason Dancisin

Social Media Coordinator

Paloma Díaz-Lobos

Staff Translator

Anna Ruscalleda

Scholarly Publications

Publications Specialist (LARR and LASA Forum)

Sara Lickey

Latin America Research Commons (LARC) Manager

Julieta Mortati

Information Technology

Director of Information Systems and Software Development

Lazaros Amanatidis

Systems Analyst

John Meyers

Finances

Financial Director

Mirna Kolbowski

Accountant

Sharon Moose

MaestroMeetings Inc.

President

Milagros Pereyra-Rojas

Vice President and Director of Operations

Mildred Cabrera

Regional Project Director

Felix Aguilar

Social Media Manager

Paloma Díaz-Lobos

Exhibits and Sponsorship

Margaret Manges

The *LASA Forum* is published online four times a year. It is the official vehicle for conveying news about the Latin American Studies Association to its members. LASA welcomes responses to any material published in the *Forum*.

Opinions expressed herein are those of individual authors and do not necessarily reflect the view of the Latin American Studies Association or its officers.

From the president / De la presidenta

por **Gioconda Herrera**, Presidenta de LASA | FLACSO Ecuador | gherrera@flacso.edu.ec

Este octubre 2020 se cumplen siete meses desde la llegada de la pandemia a nuestras vidas. El semestre arrancó en muchas de nuestras universidades con el desafío de aprender a convivir con ella. No sólo nuestras formas de enseñar y de investigar se han modificado, sino que la virtualidad captura cada vez más nuestro trabajo y nuestra cotidianidad. Nuestros procesos de socialización, de los cuales se nutre inmensamente el trabajo académico, se han transformado, muchas veces positivamente, porque hemos recuperado vínculos lejanos en el tiempo y en el espacio, pero por otro lado también hemos sufrido el detrimento de una relación más directa con nuestros estudiantes, con nuestros colegas de trabajo y nuestros grupos de investigación, pues la interacción social directa y presencial se convirtió en una actividad de algo riesgo.

La sobrecarga de trabajo y los desiguales impactos en las personas que tienen estas nuevas formas de aprendizaje y relacionamiento en las diversas geografías sociales, de género o etarias, de donde proviene nuestra membresía, son aspectos que requieren especial atención. El intercambio de experiencias en torno a nuestras vivencias en pandemia, y la búsqueda de formas sobre cómo procesar estos impactos, es una tarea pendiente a la que dedicaremos el próximo número de *LASA Forum* (invierno) y tendrá también un espacio relevante en nuestro congreso LASA2021. Los procesos de reflexividad sobre nuestra práctica y sus transformaciones en la coyuntura son centrales para convivir con la incertidumbre que todavía nos envuelve.

En esta línea de construir pequeñas certezas para afirmar el trabajo de LASA hemos trabajado, entre junio y septiembre, en su fortalecimiento institucional. En este período se pusieron en marcha políticas y acciones orientadas a democratizar los órganos de gobierno de

LASA, a mejorar la comunicación y el intercambio con las secciones y la membresía, y a transparentar los procesos de toma de decisión de nuestra asociación. Estas acciones son producto de las decisiones acordadas en el Comité Ejecutivo de la Asociación de mayo de 2020.



El primero de julio de 2020 mantuvimos una fructífera reunión con las directivas de las secciones en la que pudimos aclarar las dudas respecto a la organización de nuestro próximo congreso y en relación a la participación de las secciones en el Consejo Ejecutivo de LASA. Se ratificó, además, la necesidad de producir encuentros más frecuentes entre distintos miembros del Comité Ejecutivo y las secciones. También, en un esfuerzo de transparencia y de mayor comunicación con la membresía, se publicaron las decisiones del Consejo Ejecutivo, así como la situación de nuestras finanzas, en nuestra página web.

Respecto a la gobernanza de LASA, este número de *LASA FORUM* pone en consideración de la membresía dos importantes reformas a nuestro estatuto: el cambio de dos a tres años en el mandato de los integrantes del Comité Ejecutivo, que se hará efectivo en las próximas elecciones, y la inclusión de dos representantes de las secciones al Consejo Ejecutivo. Además, se han generado cuatro subcomités compuestos por miembros del Consejo Ejecutivo que trabajan conjuntamente con distintos integrantes del secretariado de LASA en los campos de comunicación, publicaciones, políticas de personal y relación con las secciones. Por

último, el 26 de septiembre de 2020 mantuvimos una jornada de reflexión colectiva con todos los miembros con voto y *ex officio* del Comité Ejecutivo sobre “cómo pensar LASA en la pandemia”. Este ejercicio fue una experiencia extremadamente provechosa para señalar rutas y líneas de acción para la Asociación, pues puso en evidencia que LASA enfrenta grandes desafíos pero que su carácter global, multidisciplinario y que el diálogo intergeneracional, pluralista y diverso, así como su larga experiencia institucional son las principales fortalezas que debemos activar para sobrellevar la crisis. Tenemos la confianza de que todas estas acciones van a fortalecer nuestra asociación con el fin de poder enfrentar la difícil coyuntura que atravesamos.

Ecos de la protesta social

Este octubre 2020 también se cumple un año de la ola de protestas sociales que sacudieron a varios países de América Latina. El eco de estas protestas en la vida política y social del continente sin duda se amplifica tras la pandemia. Después de la emergencia sanitaria, el descalabro económico y la puesta al desnudo de la fragilidad de varios de nuestros sistemas de protección social, las crisis políticas empiezan a aparecer nuevamente y encuentran a estados debilitados, con poca capacidad para procesar los conflictos y a sociedades cada vez más incrédulas frente a lo que les puede ofrecer el sistema político.

Las consecuencias de la pandemia en la profundización de la crisis, los sentidos de la democracia y el regreso a la calle como forma de expresión política será uno de los temas centrales de nuestro próximo congreso. Se analizará de qué manera las protestas sociales muestran los límites de las instituciones para canalizar las demandas de la sociedad, las consecuencias de la fragmentación política y la polarización en el surgimiento de respuestas autoritarias y la pluralidad de actores y demandas en juego. Este número de *LASA FORUM* “Ecos de la protesta social” inicia este recorrido a partir del estudio del carácter de las protestas y presenta cuatro reflexiones sobre las movilizaciones de octubre y noviembre de 2019 en Chile, Ecuador, Colombia y Haití. Los textos coinciden en señalar que detrás de los distintos eventos que volcaron

a la gente a la calle, generalmente relacionadas con medidas económicas y denuncias contra la corrupción, también se perfilan nuevas demandas y acciones en las que convergen luchas clasistas —urbanas y rurales— distintas expresiones del feminismo, renovados movimientos estudiantiles y movimientos diversos que terminan rebasando las iniciales demandas de la población. Además, los textos muestran una constante que preocupa en los cuatro casos, que es la inusitada violencia de las respuestas gubernamentales y la poca capacidad de los estados para procesar por otros medios los conflictos sociales.

El dossier arranca con el ensayo de Luna Follegati, “Nos quitaron hasta el miedo: Los feminismos en la revuelta social chilena”, que ofrece una lectura del octubre chileno en clave feminista. El texto muestra cómo a partir de la consigna de los estudiantes secundarios “no son treinta pesos, son treinta años” se cristalizó la protesta contra un proyecto económico y social que naturaliza las desigualdades sociales, normalizando la precariedad, la privatización de la educación y de la salud en la movilización más importante desde el retorno a la democracia en Chile. Así mismo, la autora nos muestra cómo se fueron imbricando y entrelazando distintos actores sociales —estudiantes, trabajadores y familias enteras— con las demandas de un movimiento estudiantil feminista que se manifiesta de manera transversal en el cuerpo social del estallido de octubre. Al tiempo que se mantienen las movilizaciones por varios meses y se extienden a barrios y otras ciudades, los significados de la protesta se multiplican y a la injusticia social se suma la asociación entre violencia estructural, violencia cotidiana y violencia policial; y es en el vértice de estas tres violencias que se instala el mensaje feminista con una de las expresiones de mayor incidencia global como fue la *performance* de TESIS. Así, el eco de la protesta en Chile se presenta como la apuesta por una reconfiguración del sistema político en lógica feminista a través del llamado a la constituyente.

El texto “La protesta social de 2019 y la juventud: El octubre ecuatoriano” de María Moreno, Alex Amézquita y Angélica Mejía nos muestra la centralidad que tuvieron los jóvenes en construir un significado plural de la protesta. En Ecuador, desde

el levantamiento indígena de 1990, la mayoría de movilizaciones se inscriben en una gramática de *toma* de la ciudad por parte de los habitantes del campo y mientras crece la movilización convergen actores rurales y urbanos. En esta ocasión, los autores señalan el protagonismo del movimiento indígena como un hecho indiscutible, que vuelve al escenario político nacional con una dirigencia renovada y una recomposición de la relación con sus bases. Pero el texto muestra también como se sumaron muchos otros actores, populares y de clase media, ligados a lógicas de organización más horizontales, entre ellos, la presencia de organizaciones feministas y ecologistas. Sin embargo, para los autores lo que ha quedado resonando como eco de la protesta ecuatoriana son el racismo y la violencia. Tanto el resurgimiento del racismo frente a los pueblos indígenas, de parte de amplios sectores sociales, como de la violencia en la respuesta estatal instalan una problemática que supera las demandas distributivas y que probablemente marcará el compás del conflicto social en Ecuador.

“21N: el desborde de la movilización en Colombia” del equipo de estudio de los movimientos sociales del CINEP en Colombia, liderado por Mauricio Archila nos ofrece un análisis de las tendencias históricas de las luchas sociales en Colombia como una fuente de comprensión del paro de noviembre 21, 2020. Para los autores, si bien ésta fue una de las dinámicas más importantes de los últimos años luego de la desmovilización de los actores armados, no dejan de notar que la presencia de un ciclo de varios años de movilizaciones locales y regionales con expresiones diversas en todo el país que han denunciado los estragos del extractivismo, la presencia del racismo y la violencia en sus diversas expresiones. Pero, además, al igual que en Chile y Ecuador, las peticiones y las movilizaciones rebasaron por mucho a las organizaciones sociales y políticas que convocaron el paro y mostraron una diversidad de demandas e iniciativas de distinto tipo, que en el caso colombiano estarían mostrando “el desgaste de la democracia parlamentaria y la recuperación de las calles como espacio de participación directa ciudadana.” El ensayo se acompaña de un magnífico registro fotográfico de las protestas y concluye que la pandemia parece solamente interrumpir un

proceso de movilizaciones que posiblemente ha vuelto luego de las manifestaciones de septiembre 2020 a propósito de la violencia policial.

Finalmente, el texto de Handerson Joseph, “¿Dónde está el dinero de PetroCaribe? Protestas en Haití”, examina la dinámica de las protestas que ocurrieron entre julio de 2018 y octubre de 2019 y muestra los diferentes actores involucrados, los diversos factores que movilizaron las manifestaciones y los lenguajes de la violencia. El artículo enfatiza dos aspectos no contemplados en los textos anteriores que son importantes de subrayar. Por un lado, está el rol de la diáspora haitiana en las protestas y el importante papel de las redes sociales en esta participación. Por otro lado, el autor evidencia el silencio internacional en relación a las protestas haitianas y cómo los escasos artículos sobre el tema más bien reforzaron estereotipos y estigmas sobre el caos, la miseria y la violencia. Para el autor este silencio mediático se conecta con otros silencios históricos y políticos que deben ser interpelados por la comunidad académica.

Cabe destacar que en tres de los cuatro casos los autores de estas reflexiones son académicos jóvenes latinoamericanos y que, al igual que en el número pasado, hemos querido dar voz a reflexiones colectivas producto de investigaciones en curso.

Por último, este número de *LASA FORUM* presenta dos obituarios, el homenaje a María Lugones, unas de las principales inspiradoras de los feminismos descoloniales en el continente, de autoría colectiva, y de Ivan Schulman, uno de los más destacados especialistas en el estudio de la obra y el pensamiento de José Martí, por parte de Pedro Pablo Rodríguez. //

“Nos quitaron hasta el miedo”: Los feminismos en la revuelta social chilena

por **Luna Follegati Montenegro** | Dra. Filosofía, Universidad de Chile | lfollegati@gmail.com

El presente ensayo se plantea como una propuesta de lectura feminista frente a la revuelta social de octubre del 2019. A un año del estallido, es necesario plantear perspectivas que nos ayuden a comprender la relación entre el movimiento feminista chileno y el proceso político actual, señalando los cruces y articulaciones entre ambos fenómenos. A partir de un acercamiento inicial, reconocemos dos ejes relevantes que ayudan a visualizar el entronque entre ambos movimientos: 1) la vinculación entre el movimiento feminista y la revuelta a través de la denuncia de la violencia policial como también de la violencia estructural neoliberal y patriarcal; y 2) la demanda de una reformulación democrática en clave feminista, a través de la paridad en el proceso constituyente y la exigencia de democratización del orden político en su conjunto. A continuación, comentaremos ambos aspectos.

Contexto

La perspectiva histórica nos sitúa en interesantes encrucijadas para afrontar el presente, para reflexionar desde una posición que busca identificar raíces históricas en los procesos contemporáneos, en las coyunturas políticas y acontecimientos actuales. La revuelta social de octubre 2019 es parte de esos episodios que se inscriben en la trayectoria política de la historia reciente, cuyo marco o condición de posibilidad se encuentra emparentado con una multiplicidad de condicionantes que dan cuenta del carácter

histórico y estructural del neoliberalismo. Modelo, por cierto, posibilitado por la Constitución de 1980 que, edificada en dictadura, instala el carácter subsidiario del Estado (entendido principalmente como un radical abstencionismo de su actividad), la privatización de los derechos sociales y la configuración de una serie de aspectos¹ que impiden la reformulación o transformación sustantiva de lo señalado en la carta magna. Además, agrega un conjunto de aspectos extraconstitucionales que institucionalmente transforman al neoliberalismo en una cuestión natural, articulándolo en el sistema de pensiones (Asociación de Fondos de Pensiones), en el Plan Laboral y en el actual sistema de salud (Isapres), por mencionar algunos ejemplos (Ramírez 2019).

“No son treinta pesos, son treinta años”,² señala la consigna que instalan las y los estudiantes secundarios llamando a *evadir* el pago del transporte subterráneo debido a un alza en el pasaje. Protestas esporádicas que comenzaron el 4 de octubre, cuyo hito cúlmine se encuentra el viernes 18 de octubre, cuando la evasión se transforma en un acto de protesta multitudinario, dando así inicio a la movilización más importante desde el retorno a la democracia en Chile (Angelcos y Sembler 2020). Si bien hay poca claridad sobre los factores concretos que cimentaron la legitimidad de la movilización, así como sobre las condiciones subjetivas que propiciaron las particularidades para que octubre haya sido el mes de la revuelta, lo cierto es que la

¹ Particularmente en la actual Constitución existe el Tribunal Constitucional, órgano compuesto por diez ministros que, dentro de las atribuciones, resalta el control de constitucionalidad: “el Tribunal Constitucional realiza control preventivo y posterior de preceptos legales (incluidos los decretos con fuerza de ley); en este último caso, ya sea por la vía de requerimientos de inaplicabilidad o de acciones de inconstitucionalidad” (<https://www.tribunalconstitucional.cl/tribunal/atribuciones>). Este órgano ha funcionado como contención a proyectos de ley e iniciativas al declararlas “inconstitucionales”, por ejemplo, cuando el Tribunal Constitucional dictaminó el 18 de abril de 2008 la inconstitucionalidad de la Pildora del Día Después y, por tanto, la prohibición de su distribución, arguyendo aspectos presentes en la Constitución de 1980 tales como “el derecho a la vida” y la “protección de la persona”.

² Como referencia, 30 pesos chilenos corresponden a 0,0013 dólares americanos.

transversalidad general y apoyo común fue una de las características de la movilización. Ese viernes por la tarde, una masiva jornada de protesta social se inauguró con jóvenes, familias, personas trabajadoras que se unieron al llamado celebrando el acto contestatario, colmando la plaza central de Santiago con manifestantes, para luego dar paso a escenarios de protestas desperdigados en diversos barrios: desde la periferia hasta el centro de Santiago, la revuelta pareció tomar un cauce inusitado, un verdadero “despertar” tildaron los medios a esa histórica jornada. Episodios de violencia callejera que terminaron con un Estado de Emergencia como respuesta del ejecutivo, para luego decretar toque de queda durante las siguientes jornadas. Así, inusitadamente, con la consigna aludida “no son treinta pesos, son treinta años”, se ponía nombre a un descontento radical y estructural: el cuestionamiento, malestar o incomodidad frente a la desigualdad, injusticia y precarización incrementada durante los 30 años de neoliberalismo en Chile.

La acción en la capital no tardó en replicarse a nivel nacional, territorializando demandas en un complejo y amplio marco de reivindicaciones y actores que, bajo la noción de defensa de la dignidad, articularon un coro de exigencias cuya sintonía se graficó en una salida a la calle, a través de la aparición y reivindicación de la violencia política, como también autoconvocadas formas de organización social que buscaban explicitar el descontento conformando nuevos espacios de reflexión.³ La acción de *evadir* aparece así como una metáfora en relación a dos aspectos que resaltan: por una parte, poner en cuestión el orden de acumulación al hacer un llamado al no pago que, si bien había sido convocado en otras ocasiones, esta vez sí tuvo una respuesta social; y por otra, la desobediencia civil como posibilidad

de agencia de la población movilizada. La evasión convocó a un hastío histórico, a un desgano consciente frente a la posibilidad de adecuarse al alto costo de la vida que sumían en normalidad la privatización de los recursos naturales, el lucro en la educación, la financiarización de nuestros fondos de pensiones y la falta de un sistema de seguridad social que respondiera a las necesidades de la gente, profundizando así la desigualdad en clave neoliberal (Ruiz y Caviedes 2020). Tópicos que comenzaron a colmar los medios de comunicación, las calles y los espacios de protesta al ritmo del *cacero/leo*⁴ que cotidianamente marcaba el son del descontento y la rabia acumulada de al menos treinta años. Así, cada viernes se reunían en la plaza central de Santiago miles de personas, llegando a convocatorias que marcaron incluso el millón, configurando una multiplicidad plural de cuerpos, edades, propuestas y protestas, con una “primera línea” que funcionó como una autoconvocada forma de defensa social frente a la policía, haciendo explícito el carácter complejo y distintivo de la movilización de octubre. Su acción fue tal, que la Plaza Italia (la zona de la movilización) pasó a llamarse popularmente Plaza Dignidad en alusión a las demandas que se exigían desde la calle.

Fueron al menos tres meses de movilizaciones que colmaron las plazas y lugares centrales de las capitales regionales, ciudades y pueblos del país sin distinción alguna, traduciendo según sus particularidades el problema de la dignidad y las reivindicaciones locales que se hicieron carne. Tres meses donde se derriban monumentos, se transforma la geografía de las ciudades, se cambian nombres de las calles⁵ y, sobre todo, se organizó el pueblo (Castillo 2019). Se discute y habla de política como hacía años, se articulan los vecinos y vecinas y se autoconvocan los “cabildos” y asambleas territoriales con el objetivo de “hacer algo” frente

³ Angelcos y Sembler señalan que durante el período se promovió la “organización de cabildos— espacios autoconvocados para reflexionar en torno a las posibilidades de transformación que abría la movilización— los cuales, sobre todo en un comienzo, fueron bastante masivos y transversales, al menos en la Región Metropolitana” (2020, 140).

⁴ Acción de tocar una olla con una cuchara de palo o palo. Históricamente ha sido una firma de manifestación que tiene la significación de “hacer sonar las ollas vacías”, en alusión al hambre y descontento social.

⁵ En muchos lugares del país ocurrieron tres fenómenos: se cambiaron nombres de calles que aludían a conquistadores, colonizadores, próceres o héroes patrios por figuras representativas de pueblos indígenas, mujeres y sujetos subalternos. Además, se intervinieron monumentos (de generales, héroes y próceres) pintándolos o bien reemplazándolos por otras figuras. Finalmente, lo más llamativo en Santiago fue el cambio de nombre de la plaza histórica que funciona como convocatoria a las manifestaciones (Plaza Italia) por Plaza de la Dignidad, alterando incluso mapas digitales con el nuevo nombre.

a lo que acontece: nos encontramos en la calle, en la esquina *cacero/leando*, nos reconocimos y articulamos. Nos volvimos pueblo.

Esta cotidianeidad de la revuelta tuvo un lugar de interrupción: el feminismo. Acción que irrumpe en dos sentidos: el primero, recuerda el carácter transversal del movimiento en tanto convoca a una multiplicidad de mujeres y cuerpos feminizados sin distinción; el segundo, cuestiona las estructuras de desigualdad más allá del carácter económico, señalando la profunda imbricación de las formas neoliberales con las patriarcales. A través de la violencia como clave de inteligibilidad, las feministas ensayan una respuesta frente al abuso policial, pero también al neoliberal, cotidiano e intrafamiliar, aspecto sustantivo y propio del movimiento.

La interrupción feminista del estallido

¿Qué lugar tuvo el feminismo en la revuelta? Sin duda, una primera referencia se manifiesta en la conocida performance de Las Tesis.⁶ En ella, se fragua la denuncia frente a la violencia machista con la violencia institucional, estatal y policial, denuncia que convoca a miles de mujeres a representar a través de su canto y movimiento el descontento. En un contexto donde los mutilados fruto de la represión policial aumentaban diariamente⁷, la performance “Un violador en tu camino” se adapta a un sentir frente a la vulneración de derechos de las mujeres por las fuerzas policiales, como también frente al silencio cotidiano por la violencia estructural, simbólica y sexual que vivimos las mujeres. La acción de Las Tesis fue sustantiva por la masividad que logra en la convocatoria en diferentes ciudades del país, pero también por el carácter latente del feminismo como una reivindicación anterior a las demandas globales del estallido. En este sentido, la interrupción feminista de la performance durante octubre es aquella que trae nuevamente a la escena al feminismo, en tanto problemática

que estructuralmente cuestionaba al patriarcado como fenómeno, pero cuyos antecedentes derivan en dos ejes previos: en primer lugar, el reciente movimiento feminista estudiantil (2018), y en segundo término, la larga trayectoria del movimiento feminista latinoamericano en su cuestionamiento y lucha contra la violencia política y de género.

Un año antes, el movimiento feminista estudiantil configuró un hito sustantivo en el llamado “Mayo feminista”, aludiendo a la masiva movilización de estudiantes universitarias de mayo 2018 que, a nivel nacional, habían denunciado los casos de acoso sexual en la universidad y que hasta el momento se mantenían impunes, como también la demanda por una educación no sexista (De Fina y Figueroa 2019; Troncoso, Follegati y Stutzin 2019; Zerán 2018; Follegati 2018). La amplitud de la movilización fue sustantiva: cientos de tomas, marchas y paros a nivel nacional, espacios de reflexión, conversación, como también un posicionamiento público de la temática. El feminismo estudiantil detonó reflexión y organización, convocando asambleas feministas, pero también propiciando la activación y creación de espacios profesionales de mujeres: surgieron redes profesionales de profesoras, abogadas, geógrafas, médicas, entre otras.

Si bien el feminismo estudiantil venía desarrollándose con anterioridad al mayo del 2018 (Follegati 2018), vinculado a cuestionamientos que provenían a su vez del movimiento estudiantil chileno del 2006 y 2011, fue en el 2018 cuando el ímpetu feminista se posiciona también como una crítica sustantiva y de profundo malestar frente al neoliberalismo chileno y a los marcos políticos de la transición a la democracia (Ruiz y Miranda 2018). Similar a la demanda por el “fin al lucro” en la educación, que logró condensar un cuestionamiento a las bases del neoliberalismo a la chilena, en el caso del feminismo estudiantil puede aseverarse que marcó un hito en cuanto a la politización de miles de jóvenes, convirtiéndose

⁶ Colectivo Feminista de la región de Valparaíso que creó la performance “Un violador en tu camino”, <https://www.instagram.com/latesis/?hl=es-la>.

⁷ Según el Instituto Nacional de Derechos Humanos, entre el 17 de octubre y el 30 de noviembre hubo 11 180 personas detenidas, 11 179 personas heridas, 296 personas con denuncias por trauma ocular (pérdida de alguno de sus ojos) y 26 víctimas que presentaron querrelas por homicidio u homicidio frustrado, de esas, 6 con resultado de muerte. INDH, Informe Anual sobre la situación de derechos humanos en el contexto de la crisis social (INDH 2020).

en uno de los movimientos más importantes desde los años 90. La politización desde el feminismo generó un acercamiento de muchas mujeres a la comprensión de las injusticias desde esa perspectiva, posibilitando un cuestionamiento crítico a las situaciones de desigualdad y precarización. En este contexto, las multitudinarias marchas del 8 marzo del 2019 y 2020, convocadas por la Coordinadora 8 de marzo, sellaron un proceso de recomposición de la problemática feminista convocando a casi dos millones de mujeres este año, incentivando así una visibilización del movimiento a partir del llamado internacional a la #huelgafeminista del 2019 (Gago 2020).

El movimiento feminista estudiantil señaló así un cuestionamiento radical y profundo a las estructuras patriarcales, representadas no sólo a nivel institucional, sino también en el carácter cotidiano y arraigado de las violencias; desde las brechas salariales a las bajas jubilaciones de las mujeres, como también los altos costos de la salud privatizada y las interminables cifras de femicidios que, año tras año, engrosan los datos sobre la falta de justicia e impunidad. Más que una respuesta local a fenómenos internacionales como el #MeToo, el movimiento chileno se encuentra vinculado a la experiencia local de precarización de la vida, acrecentada por las medidas de corte neoliberal implementadas durante los últimos treinta años en la región. Una de las particularidades del movimiento radica en esto: la vinculación de condiciones locales, latinoamericanas, que han hecho prescindible la vida de las mujeres ya sea en su incorporación desmejorada y precarizada a los circuitos económicos, como la brutalidad de la violencia machista identificada bajo el concepto de femicidio. En esto, la exigencia por una vida digna por parte de las feministas es una demanda que vincula tanto las manifestaciones de los años 2000 como las del movimiento feminista durante la dictadura.

Señalar “Nos quitaron hasta el miedo”, como versa la consigna de las feministas, pero también las levantadas en el octubre chileno, apela a esa vinculación entre un grito de profundo descontento, pero también de hastío, rabia y la consecuente necesidad de respuesta y acción. Frase que representa el cansancio por el silencio frente a la violencia machista, pero también por el sistema neoliberal. Como señala Alejandra Castillo, el estallido de octubre tiene antecedentes en la revuelta feminista al volver “visible la violencia patriarcal en la silenciosa inercia de las instituciones, en la cotidianidad de la vida privada y en el daño que produce el modelo económico neoliberal en el cuerpo de la sociedad: ahí está la doble jornada de las mujeres y el trabajo de cuidado que realizan para demostrarlo” (Castillo 2019, 36).

Así, el movimiento cuestiona un aspecto fundamental, y es justamente la existencia de un orden que discrimina, violenta, precariza y excluye. Pero también, junto con la denuncia, exige su transformación, articulando elementos que no son regularmente observados en conjunto, al establecer la relación de mutua convivencia entre neoliberalismo, extractivismo y patriarcado (Coordinadora 8 de Marzo⁸). Como acertadamente menciona Verónica Schild,⁹ uno de los aspectos que posiciona Las Tesis es el carácter estructural de las violencias vinculadas a las formas de implementación del neoliberalismo durante los años 90 y 2000 (Schild 2016). La politización desde el feminismo logra explicitar estos aspectos, estableciendo un diálogo entre las demandas estudiantiles de los años 2000 y la crisis de legitimidad actual (Garretón 2016; Ruiz 2015; PNUD 2019). Mueve el marco “de lo posible” al considerar una reconfiguración total de los espacios políticos y demandas tradicionales, como también de las posibilidades de transformación. Exige un *más allá* incluso de los márgenes de la izquierda, corre el cerco de las formas de organización y activación

⁸ Por ejemplo, ver la siguiente nota: Natalia Espinoza C., “8M con todo: ‘En esta marcha lucharemos por lo que queremos, para que la vida en Chile sea radicalmente distinta’”, *El Mostrador*, 2 de marzo, <https://www.elmostrador.cl/braga/2020/03/02/8m-con-todo-en-esta-marcha-lucharemos-por-lo-que-queremos-para-que-la-vida-en-chile-sea-radicalmente-distinta/>.

⁹ Verónica Schild, “Seguimos atrapados en una cultura legalista y eso, para avanzar en los cambios que nos interesan a las feministas, es bien pobre”, Escuela de Psicología, Pontificia Universidad Católica de Valparaíso, 8 de enero de 2020, <https://www.psiucv.cl/2020/01/veronica-schild-seguimos-atrapados-en-una-cultura-legalista-y-eso-para-avanzar-en-los-cambios-que-nos-interesan-a-las-feministas-es-bien-pobre/>.

social a través de un movimiento carente de una centralidad, direccionalidad o liderazgo específico. Es multipolar y transversal, plural y diverso.

En eso, el movimiento feminista caló profundo, en tanto incomodidad que, anidada en lo social, no tardó en manifestarse masivamente interrumpiendo el estallido al son de “Un violador en tu camino”. Con esto, el feminismo no sólo atraviesa las propuestas vigentes en la revuelta, sino que se entromete nuevamente en las casas, en las conversaciones de pasillo, en las asambleas y en las manifestaciones callejeras de octubre. Vincula una denuncia estructural al modelo neoliberal y patriarcal con expresiones cotidianas en términos de abuso, construyendo un lenguaje político a partir del significativo violencia que logra establecer un puente entre la experiencia cotidiana, subjetiva y personal con el carácter estructural del modelo económico. Así, el feminismo juega como un antecedente para sentar las bases del estallido al poner en cuestión la normalidad de una vida de injusticias, señalado con vehemencia y fuerza inusitada: Al silencio no volveremos. ¡Hemos perdido hasta el miedo!

De la democracia de la transición a la democratización feminista

El 5 de octubre de 1988, bajo la dictadura de Augusto Pinochet, se ganaba el plebiscito que bajo la alternativa “No” puso término a los 17 años de dictadura en el país. El 18 de octubre del 2019, nuevamente marca un hito, esta vez frente al posible término de orden político vinculado a las formas de gobierno fuertemente cuestionadas por la crisis de legitimidad que afecta a la clase política, y particularmente a los partidos tradicionales que estuvieron en el ejecutivo desde el retorno a la democracia (1990). El estallido configura una crítica a dicha forma de comprensión política, particularmente representada en una racionalidad política transicional, en una forma de administración gubernamental bajo los gobiernos de las coaliciones de la Concertación, Chile Vamos y Nueva Mayoría.

La revuelta de octubre pone en suspenso el orden de la Transición. Desactivó esa forma de comprensión de la política bajo una democracia elitista y corporativa (Castillo 2020) que comprende el ejercicio de lo político mediante el acceso a las urnas cada cuatro años. El proceso constituyente termina con una práctica que leía los procesos de confrontación, de conflicto y diálogo político, en clave transicional, es decir, bajo una retórica del orden que buscaba una desactivación del carácter transformador, radical y subversivo que toda política puede tener. El proceso constituyente que resulta como consecuencia del Chile movilizado en octubre,¹⁰ descompone la política de la transición a la democracia activando nuevas formas de politicidad y procesos de democratización, entre ellas, el feminismo tiene un lugar fundamental en la posibilidad de repensar la democracia y las relaciones políticas en su conjunto.

El carácter histórico de la incomodidad feminista frente a la democracia se demuestra una vez más en el octubre chileno. La interrupción feminista en el estallido apela un doble sentido, desde el cuestionamiento a la normalidad cotidiana a través del problema de la violencia, como también mediante la crítica a una forma de orden político que reitera la exclusión de las mujeres, cuerpos feminizados y disidencias bajo un patrón que continúa asimilando el universal masculino con el individuo político. Esta vez la propuesta feminista pretende ser histórica: la exigencia de una Asamblea Constituyente marca un hito al enunciarse como una asamblea *paritaria*. En este sentido, la discusión constitucional iniciada a partir de octubre sería relevante para el movimiento feminista toda vez que —de ganar las alternativas Apruebo y Convención Constitucional— se estaría iniciando un proceso constituyente de carácter paritario por primera vez en la historia de los Estados modernos. Aspecto relevante en tanto que la discusión sobre paridad —cuya condición de posibilidad sólo es entendible en el contexto del activo movimiento feminista reciente— supuso una reflexión y análisis en relación a la participación política de las mujeres, como también la necesidad

¹⁰ El 15 de noviembre se firma el “Acuerdo por la Paz Social y la Nueva Constitución” por el conjunto de partidos políticos del oficialismo y la mayoría de la oposición, donde se intenta recoger la demanda por una nueva constitución.

de su inclusión en los espacios de deliberación política y, particularmente, un cuestionamiento sobre el orden democrático.

Algunas recientes producciones han problematizado estos aspectos (Castillo 2019; Brito 2020), enfatizando preguntas sobre la relación entre feminismo, paridad y democracia, o bien, revisitando anteriores debates. A partir de estas lecturas, es posible sostener que la pregunta por la relación entre las mujeres y la democracia no sólo es actual, sino que reposiciona problemas de larga data tanto para la teoría feminista como para el movimiento (Kirkwood 1982, 1983, 1986; Follegati 2020). Particularmente, la discusión sobre la democracia y representatividad del movimiento feminista en el Estado, la vinculación de sus demandas, mecanismos de “institucionalización” como también las formas de representatividad, horizontalidad y autonomía del movimiento fueron aspectos largamente abordados por las feministas de los 80 (Molina 1986; Muñoz 1988; Kirkwood 1986), temáticas que hoy vuelven a resituarse como problemas en el contexto paritario de la constituyente.

Este 25 de octubre del 2020 se realizará un plebiscito para que la ciudadanía decida si desea una nueva Constitución y bajo qué mecanismo. A un año de la revuelta y 32 años después del plebiscito que marca el término de la dictadura, se vuelve a la disyuntiva que Julieta Kirkwood planteaba en los años 80: ¿qué democracia queremos las mujeres? (Kirkwood 1986). Así, indagar sobre los argumentos que emergen en la discusión constituyente, como también sobre la vinculación entre las demandas, reivindicaciones y participación del movimiento feminista en el proceso, es prioritario para la comprensión del momento actual desde una perspectiva de género. La constituyente paritaria interrumpe también el curso de aquella política que es decidida desde el canon de lo masculino, al señalar la exigencia de la paridad como una forma de ensayar otro tipo de democracia, pero también una paridad que no replique una forma elitaria de representación

política (Castillo 2020), más bien un concepto de paridad que pueda cuestionar las formas de distribución del poder. Además, es relevante plantearse una crítica profunda sobre cómo el carácter paritario también debe cuestionar las injusticias institucionalizadas en la estructura político-administrativa del Estado: pensar la paridad en la constituyente como el inicio de un proceso de democratización profunda de los órganos del Estado. Una constitución donde el feminismo se impregne en los principios, pero también en los derechos, sería sustantivo en tanto posibilidad de cristalizar relaciones de poder igualitarias, avanzando hacia la despatriarcalización del ordenamiento constitucional y facilitando con ello la transformación del sentido de la norma constituyente (Bourdieu 2000). Al menos, las discusiones deben consagrar aspectos claros para el movimiento feminista, como el derecho a una vida libre de violencia, a la salud, a la valoración del trabajo doméstico no remunerado, a la salud sexual y reproductiva, a la igualdad en el acceso a los bienes de propiedad, al respeto y reconocimiento a los saberes ancestrales, y la construcción de las respectivas normativas para que dichos derechos se vuelvan efectivos.¹¹

Finalmente, un desafío sustantivo radica en la vinculación entre el movimiento feminista y las personas representantes en la constituyente. Los canales de comunicación, los espacios de diálogo y la forma de articulación entre ambos espacios resultan relevantes para iniciar un proceso donde la diversidad del proyecto feminista se represente, un feminismo que también es diverso, interseccional, pero que en su conjunto pueda proponer nuevas alternativas de vida y justicia social. Un desafío es, entonces, que la apertura democrática por parte de la constituyente pueda comprender un proceso político colectivo, común, feminista, bajo nociones de democracia participativa que, por ejemplo, se relevaron por las activistas feministas a finales de los años 80. Esta vez se busca una interrupción feminista al curso tradicional de la democracia neoliberal, propiciando una imaginación político-feminista que comprenda los dilemas

¹¹ Algunos aspectos explícitamente patriarcales de la actual constitución: sólo se nombra una vez la palabra mujer, la familia es tratada en singular comprendiendo un solo modelo de ésta (heterosexual) y la prohibición del aborto bajo el argumento de protección de la vida del que está por nacer (Art. 19 núm. 1) son algunos ejemplos que grafican la necesidad de transformación de la actual carta.

y aprendizajes del pasado, pero que tensione y ponga en perspectiva una nueva democracia. Como decían las feministas de los 80: No hay democracia sin feminismo. El término de la política y forma de la transición se fragua también en esta escena, en la posibilidad real de construir una democracia feminista.

Así, no solo ocurre como una interrupción feminista a la revuelta, sino que se conjuga una reconfiguración feminista de la democracia. El movimiento y su acción, visto así, permeó en dos sentidos al estallido: marcó un antecedente en relación a las posibilidades, marcos y ámbitos de transformación; y posibilitó también una ampliación del concepto y práctica de democracia desde la experiencia feminista. Feminismo y estallido entroncados en la exigencia de justicia e igualdad sustantiva, de una vida digna y libre de violencia machista. Porque, como se lee en los rayados callejeros: ¡a la normalidad no volveremos!

Referencias

- Angelcos, Nicolás, y Camilo Sembler. 2020. "No son 30 pesos, son 30 años: Análisis crítico de la movilización social". *Revista Análisis el año 2019*. Departamento de Sociología, Universidad de Chile.
- Bourdieu, Pierre. 2000. "La fuerza del derecho". En *Poder, derecho y clases sociales*. Bilbao: Desclée Brouwer.
- Brito, Sofía, ed. 2020. *Constitución feminista*. Santiago de Chile: Pez Espiral.
- Castillo, Alejandra. 2019. *Asamblea de los cuerpos*. Santiago de Chile: Sangría.
- Castillo, Alejandra. 2020. "Por un concepto complejo de paridad". En Brito, *Constitución feminista*. Santiago de Chile: Pez Espiral.
- De Fina González, Débora, y Francisca Figueroa Vidal. 2019. "Nuevos 'campos de acción política' feminista: Una mirada a las recientes movilizaciones en Chile". *Revista Punto Género* 11: 51-72.
- Follegati, Luna. 2018. "El feminismo se ha vuelto una necesidad: Movimiento estudiantil y organización feminista en Chile (2000-2017)". *Revista Anales de la Universidad de Chile*, núm. 14, serie 7: 261-291.
- Follegati, Luna. 2020. "¿Qué democracia? Feminismo y política en el Chile de los 80s". *Revista de Sociología* 35 (1): 56-68.
- Gago, Verónica, et al. 2020. *La Internacional Feminista: Luchas en los territorios y contra el neoliberalismo*. Buenos Aires: Tinta Limón.
- Garretón Merino, Manuel. 2016. "La crisis de la sociedad chilena, nueva constitución y proceso constituyente". *Anales de la Universidad de Chile*, núm. 10: 79-92.
- INDH (Instituto Nacional de Derechos Humanos). 2020. *Informe anual sobre la situación de derechos humanos en el contexto de la crisis social*. <https://bibliotecadigital.indh.cl/bitstream/handle/123456789/1701/Informe%20Final-2019.pdf?sequence=1&isAllowed=y>.
- Kirkwood, Julieta. 1982. *Feminismo y participación política en Chile*. Documento de trabajo 159. Santiago de Chile: FLACSO.
- Kirkwood, Julieta. 1983. *El feminismo como negación del autoritarismo*. Material de discusión 52. Santiago de Chile: FLACSO.
- Kirkwood, Julieta. 1986. *Ser política en Chile: Los nudos de la sabiduría feminista*. Santiago de Chile: Cuarto Propio.
- Molina, Natacha. 1986. *Lo femenino y lo democrático en el Chile de Hoy*. Santiago de Chile: VECTOR.
- Muñoz, Adriana. 1988. *Fuerza feminista y democracia: Utopía a realizar*. Santiago de Chile: Instituto de la Mujer, VECTOR.
- PNUD (Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo). 2019. *Diez años de auditoría a la democracia: Antes del estallido*. Santiago de Chile: PNUD. https://www.undp.org/content/dam/chile/docs/gobernabilidad/undp_cl_auditoria_pdf_2020.pdf.
- Ramírez, Simón. 2019. "Constitución chilena y gubernamentalidad neoliberal". *Derecho y Crítica Social* 5 (1-2): 83-122.
- Ruiz, Carlos. 2015. *De nuevo la sociedad*. Santiago de Chile: LOM.
- Ruiz, Carlos, y Sebastián Caviedes. 2020. "La rebelión de los hijos de la modernidad neoliberal". *Revista Análisis el año 2019* (Departamento de Sociología, Universidad de Chile).
- Ruiz Encina, Carlos, y Camila Miranda Medina. 2018. "El neoliberalismo y su promesa incumplida de emancipación: Bases del malestar y de la ola feminista". *Anales de la Universidad de Chile* 14: 189-201.
- Schild, Verónica. 2016. "Feminismo y neoliberalismo en América Latina". *New Left Review* 96: 63-99.
- Troncoso Perez, Lelya, Luna Follegati y Valentina Stutzin. 2019. "Más allá de una educación no sexista: Aportes de pedagogías feministas interseccionales". *Pensamiento Educativo: Revista de Investigación Educativa Latinoamericana* 56 (1): 1-15.
- Zerán, Faride, ed. 2018. *Mayo feminista: La rebelión contra el patriarcado*. Santiago de Chile: LOM. //

La protesta social de 2019 y la juventud: El octubre ecuatoriano

por **María Moreno Parra** | FLACSO-Ecuador | mstoreno@flacso.edu.ec

Alexander Amézquita Ochoa | Universidad Central del Ecuador y FLACSO-Ecuador | amezquita@uce.edu.ec

Angélica Mejía | Universidad Central de Venezuela | angelica.mc21@gmail.com

Las protestas recorren América Latina

En 2019, varias protestas sacudieron a América Latina. Su intensidad y convocatoria masiva tomaron por sorpresa a la región y, en algunos casos, constituyeron manifestaciones de una magnitud inédita, o al menos no vista en décadas. Las movilizaciones dejan múltiples interrogantes sobre cómo entender estas manifestaciones de descontento, los factores que las propiciaron, su relación con crisis económicas, políticas y sociales tanto nuevas como de viejo cuño, las formas organizativas emergentes y su relación con organizaciones tradicionales, los nuevos repertorios de acción, entre muchas otras cuestiones.

La interpretación debe tomar en cuenta que el ciclo de las *commodities* (materias primas) configuró la entrada de la región a un nuevo orden mundial de explotación y exportación de materias primas. Desde inicios del presente siglo, se experimentó un aumento de los ingresos de los estados en la región, así como de sus inversiones sociales, pero la incidencia de los gobiernos latinoamericanos en la reducción de las desigualdades en este periodo resultó superficial y limitada, independientemente de su filiación de izquierda o derecha (Daher, Moreno, y Aninat 2017; Camacho y González 2020; Sánchez-Ancochea 2019). Adicionalmente, este ciclo es parcialmente responsable de generar un nuevo plano de asimetrías, involucradas con prácticas extractivas, desigualdades territoriales, contextos de desposesión y respuestas restringidas a políticas identitarias (Kingstone 2018; Svampa 2013; Sanahuja 2016).

Estas asimetrías son apenas un componente de la comprensión de las movilizaciones recientes en América Latina. Giros ecologistas, defensa de la educación pública y una mayor integración de poblaciones rurales, indígenas y urbanas, también son el resultado del ciclo de las *commodities*, pues el mayor gasto social se refleja en muchos lugares a través de renovados empoderamientos, organización popular y ampliación de espacios para políticas de reconocimiento (González Meyer 2019). Sin embargo, las economías morales de las movilizaciones recientes en la región (Aguirre Rojas 2019) revelan que también las motivan las conexiones con ejes multidimensionales, expresados en nuevas ontologías y relaciones atribuidas entre naturaleza y cultura; oposiciones interseccionales frente a nuevas configuraciones conservadoras; y la incorporación renovada de un eje generacional que ya no se erige solo en el potencial revolucionario de la juventud, sino también sobre su expulsión sistemática respecto de protecciones sociales, políticas públicas e identitarias, y participación efectiva en la política.

Estos ejes, otrora relativamente independientes y aislados, encuentran una nueva economía moral en la que pueden ensamblarse, de formas más o menos programáticas. Ya sea en escenarios como el colombiano, donde la defensa del presupuesto para la educación superior encontró resonancias en el fortalecimiento reciente del movimiento campesino o en la ratificación de los acuerdos de paz; el chileno, en el que las distintas manifestaciones antisistema se configuraron en una plataforma para múltiples reivindicaciones generacionales, de género, sexuales y de clase; o

el boliviano, en el que las posiciones respecto a la expulsión política de Evo Morales funcionaron como un prisma para revelar nuevos racismos anclados a discursos conservadores y religiosos. La inconformidad de grandes contingentes de jóvenes en la región, con identidades diversas —la mayoría de ellos expulsados de procesos de inserción educativa y laboral, de participación política o de otro tipo de oportunidades— expuso un arsenal discursivo, así como un repertorio de movilizaciones desplegadas en el uso de redes sociales y nuevas formas de comunicación y organización, que es una manifestación de dicha economía moral y sus capacidades de articulación. Es por ello que realizamos una aproximación a las protestas en Ecuador desde la mirada de las y los jóvenes.¹

Octubre de 2019 en Ecuador

El 1 de octubre de 2019, el presidente Lenín Moreno anunció en el decreto 883 la eliminación del subsidio a la gasolina y otras medidas de ajuste como la reducción de salarios a empleados públicos. Esta decisión se enmarcaba en el cumplimiento de compromisos acordados con el Fondo Monetario Internacional. Ese mismo día, el gremio de transportistas convocó a un paro general por 48 horas. Esta medida desencadenó una serie de movilizaciones durante 11 días, que constituyeron las protestas más intensas y masivas de las últimas décadas en Ecuador.

A pesar de que el gremio de transportistas negoció un alza en el precio de los pasajes, las protestas no cesaron. Fueron sostenidas por organizaciones sindicales y de estudiantes, y adquirieron una nueva dimensión cuando el movimiento indígena se puso a la cabeza de las movilizaciones y convocó a una protesta nacional. Miles de personas pertenecientes a sus organizaciones y comunidades se movilaron desde las provincias hacia la capital. Quito fue el centro del conflicto, aunque la protesta tuvo una dimensión nacional y adquirió un carácter de levantamiento popular. Junto con los manifestantes indígenas, amplios sectores de la ciudadanía organizada y no organizada expresaron su rechazo

a las medidas económicas: colectivos feministas, jóvenes, comunicadores alternativos, artistas, vecinos de barrios populares y miles de ciudadanos se sumaron a las protestas. Su lucha se dio a través de marchas, plantones, cierres de vía, tomas de edificios públicos, pronunciamientos, un cacerolazo general, entre otras formas de acción, que estuvieron acompañadas del despliegue de redes de solidaridad y apoyo al movimiento indígena.

La protesta generalizada no solo apuntó al “paquetazo” económico de Moreno, sino que cuestionó las relaciones de desigualdad de la sociedad ecuatoriana. La respuesta fue una inusitada violencia del Estado, con una declaración de estado de excepción prácticamente al iniciar las protestas. La represión dejó un saldo de 11 muertos, 1340 heridos y más de 1000 detenidos, 80 por ciento de los cuales resultaron de detenciones arbitrarias (Defensoría del Pueblo 2019). La protesta terminó con un diálogo televisado entre representantes del movimiento indígena y del gobierno nacional, y con la derogación del decreto 883.

Una acumulación de descontentos

Las manifestaciones de octubre de 2019, aunque sorprendidas en su intensidad y magnitud, venían precedidas de una acumulación de descontentos, más allá del detonante inmediato de la eliminación del subsidio a la gasolina. Estos descontentos se relacionan principalmente con el acumulado histórico de injusticias y violencias producto del modelo económico y político hegemónico. Un elemento clave fue el deterioro de la economía que comenzó durante los últimos años del gobierno de Correa, con un retorno a medidas neoliberales que se han profundizado en el actual régimen, y cuyas repercusiones se han sentido especialmente en los últimos años. Esta situación se ha reflejado en los indicadores económicos: la pobreza multidimensional se incrementó a partir de 2017, llegando a 37,9 por ciento en diciembre de 2018 (Chiriboga Tejada y Arias 2020, 188); mientras se observó una reducción del empleo adecuado, con

¹ Estas reflexiones se basan en el proyecto de investigación “Sujetos del Paro de Octubre en Ecuador”, financiado por la Fundación Rosa Luxemburgo. Este artículo se ha beneficiado del intercambio intelectual con colegas de grupos de estudio convocados por la Fundación.

la tasa más baja en los últimos 12 años (Chiriboga Tejada y Arias 2020, 184), que para junio de 2019, solamente englobaba al 37,9 por ciento de los trabajadores (Acosta y Cajas Guijarro 2019).

La conflictividad social en Ecuador ha ido en aumento desde 2014, a partir de la caída internacional de los precios de las commodities y la profundización de las tensiones relacionadas con el extractivismo y la vulneración de derechos laborales. Estas tensiones se mostraban ya claramente en la “Marcha por la vida y la dignidad de los pueblos” en agosto de 2015. El movimiento indígena también cuestionó la falta de concreción en la práctica del estado plurinacional y denunció el desmantelamiento de la educación bilingüe. En 2016, las tensiones crecieron en los territorios indígenas y campesinos en resistencia a la megaminería, como el caso del territorio shuar de Nankints desalojado por una empresa minera china con la venia del gobierno. La criminalización de la protesta social caracterizó este período (Iza, Tapia y Madrid 2020, 79).²

Entre 2017 y 2018, el nuevo gobierno hizo un llamado al diálogo. Sin embargo, mientras avanzaban los acuerdos con las elites empresariales y financieras, se estancaban los diálogos con los movimientos sociales. El acuerdo con el FMI terminó por desgastar la relación con las organizaciones del movimiento indígena y de los trabajadores. Entre enero y septiembre de 2019, se registraron aproximadamente 30 acciones de hecho que respondieron a distintas agendas de organizaciones y movimientos sociales y al rechazo hacia las políticas económicas que venía adelantando el gobierno de Moreno.³

El gobierno demostraba un cierre institucional para procesar las demandas de los movimientos sociales. Luego de la ruptura de los diálogos en agosto, las organizaciones sindicales y el movimiento indígena llamaron a movilizaciones para la segunda mitad

de octubre. La expedición del decreto 883, el día 1 de octubre, precipitó las movilizaciones y generó una masiva respuesta popular.

La pluralidad de sujetos y la simultaneidad de las luchas

Si bien el paro convocado por los transportistas fue el factor desencadenante de las protestas, el protagonismo del movimiento indígena fue un hecho indiscutible. El movimiento se posicionó como actor central de las movilizaciones, con una nueva dirigencia y un discurso capaz de construir alianzas con diversos sectores, bajo la demanda de derogar el decreto 883. Octubre evidenció la capacidad del movimiento indígena de recomponerse luego de una década de represión y fragmentación, mediante un trabajo de reconstitución de las relaciones entre el liderazgo nacional y las bases (Altmann 2020). Con el llamado a paro nacional de la CONAIE, al que se sumaron organizaciones y comunidades de la FENOCIN y la FEINE, hombres, mujeres, niños, adultos mayores y jóvenes de comunidades indígenas y campesinas marcharon hacia Quito desde distintas provincias. El llamado fue exitoso y logró movilizar a veinte mil manifestantes indígenas para el paro del 9 de octubre y a más participantes los días subsiguientes (Altmann 2020, 3).

La movilización indígena se articuló, en una suerte de coalición de calle, con actores pertenecientes a sectores organizados y no organizados de clases populares, pero también de clases medias, con descontentos múltiples. No estuvieron ausentes organizaciones políticas más tradicionales como sindicatos y partidos, pero adquirieron especial relevancia actores colectivos ligados a lógicas de organización emergentes y más horizontales, como grupos ecologistas, feministas y de jóvenes. Los diversos perfiles de los manifestantes apuntan

² Entre 2007 y 2015, el total de personas judicializadas en el país llegó a 841 individuos, bajo las figuras de resistencia a la autoridad, terrorismo, sabotaje e incitación a la discordia; 90 por ciento de estos casos judiciales fueron iniciados por la Fiscalía en contra de indígenas, defensores de la naturaleza, trabajadores y estudiantes (Calapaqui Tapia 2017).

³ Entre ellas, se denunciaba la privatización de empresas públicas y de la seguridad social; las actividades extractivas y despojos territoriales; la pérdida de derechos laborales; los recortes al presupuesto para programas contra la violencia de género y por los derechos sexuales y reproductivos, así como la lucha por la despenalización del aborto; la desatención a las necesidades del campo; la falta de atención y financiamiento de gobiernos locales, el recorte al presupuesto a la educación, entre otras.

hacia una articulación plural en las movilizaciones de octubre, con una simultaneidad de luchas y variedad de motivaciones.

La participación de las mujeres fue contundente y transversal. Mujeres indígenas y mestizas, rurales y urbanas, feministas, organizadas o no, participaron al frente de las movilizaciones y también en los espacios de cuidado, en las ciudades o defendiendo los territorios, liderando la orientación de las acciones, fortaleciendo la memoria de lucha, y enfatizando el carácter anticolonial, antipatriarcal y anticapitalista de la resistencia por la vida. En este sentido, “la lucha de Octubre se enlaza a un repertorio de acción construido por las organizaciones populares y feministas” (Iza, Tapia y Madrid 2020, 136).

Las redes de colaboración, solidaridad y cuidado fueron clave para sostener la protesta durante los once días. Múltiples voluntarios y voluntarias, así como miembros de organizaciones, encontraron una estructura para su participación en los centros de acopio y acogida humanitaria abiertos en diferentes universidades y centros comunitarios. En este sentido, las universidades jugaron un papel clave, al abrir espacios que fueron puntos focales donde se podía sostener la lucha y renovar las fuerzas. Las diferentes acciones de cuidado y protección de la vida (atención a heridos, hospedaje, alimentación, cuidado de niños y niñas, soporte emocional, etc.) encontraron una base de operación desde donde dar apoyo a los manifestantes. El acumulado y la influencia de las luchas feministas se expresa en la manera en que las actividades de cuidado fueron valoradas como acciones de igual importancia que aquellas que se llevaron adelante en la manifestación callejera.

Los jóvenes en la protesta social

Durante las protestas de octubre fue marcada la presencia juvenil. Su participación reflejó una amplia diversidad de perspectivas, militancias y condiciones: algunos con experiencia organizativa, pero muchos sin ella; de clases populares, pero también de clases medias; indígenas, mestizos y afroecuatorianos; jóvenes urbanos y rurales, estudiantes secundarios y universitarios. Las y los jóvenes participaron en la primera línea, en las brigadas médicas, en el aprovisionamiento de comida, medicina o insumos para la lucha en la calle, generando información, entre otras formas de participación.

Para una nueva generación de jóvenes indígenas, las manifestaciones de octubre fueron un momento de encuentro intergeneracional, en el que “los hijos y las hijas del gran levantamiento de 1990” observaron nuevamente la potencia del movimiento como actor político de primera importancia y la recomposición de los tejidos comunitarios y organizativos. Para la juventud indígena fue un momento de actualización de la memoria de lucha y repertorios de las generaciones anteriores, inscribiendo su acción política en una historia de resistencia de larga data.

Al mismo tiempo, para ellos, como para muchos jóvenes mestizos, octubre fue una muestra palpable del racismo recalcitrante de una parte de la sociedad ecuatoriana. Expresiones de racismo abierto surgieron en el discurso de políticos que llamaban a los indígenas a “regresar al páramo”, y en el de periodistas y ciudadanos que veían con temor la presencia de indígenas en la capital, estigmatizándolos como vándalos y salvajes. Estos discursos también llamaban a las fuerzas del orden a aplicar aún mayor violencia. Las expresiones racistas que circularon por los medios de comunicación y redes sociales motivaron a algunos jóvenes a involucrarse en las protestas, quienes expresaron su necesidad de posicionarse en contra de las ideologías racistas y la intensa represión policial. La indignación fue una emoción movilizadora para la mayoría. En la coyuntura de la protesta de octubre, las y los jóvenes vieron una posibilidad de tejer alianzas

interétnicas e interclasistas, y subvertir, al menos momentáneamente, las jerarquías sociales que estructuran la sociedad ecuatoriana.

Las protestas también se nutrieron de las formas de sociabilidad de los jóvenes y de su uso de las tecnologías de información y comunicación. Por una parte, se activaron redes de socialización primaria —grupos de amigos, compañeros, vecinos y familiares— para participar y darse protección en la protesta. Por otro lado, las plataformas digitales y las redes sociales fueron determinantes en la dinámica de las movilizaciones. La parcialización de la información impuesta por los medios de comunicación privados y la censura a las voces de los manifestantes, propiciaron la búsqueda de información en medios alternativos y, a su vez, que muchos jóvenes se articularan a la protesta desde el activismo digital. La creación y difusión de información alternativa logró romper el cerco mediático y la versión oficial que deslegitimaba la protesta.

La desconfianza de las y los jóvenes hacia el sistema político fue patente, con una valoración negativa de las instituciones y los partidos políticos, y una preocupación porque el Estado haya dejado de ser garante de derechos. Adicionalmente, otras tensiones que han marcado la política ecuatoriana se hicieron manifiestas en la protesta. A pesar de que ambos grupos estuvieron entre los manifestantes, las tensiones entre sectores correístas y anticorreístas se hicieron patentes en las movilizaciones. Los correístas pedían la salida de Moreno mientras que el movimiento indígena se desmarcaba de dicha propuesta y enfatizaba la oposición al decreto 883. En todo caso, la mayoría de manifestantes coinciden en que las medidas neoliberales representan una amenaza a la vida material de grandes sectores de la sociedad ecuatoriana.

Reflexiones finales

Aunque el logro inmediato de octubre fue la derogación del decreto 883, esto no implica que las demandas de la heterogeneidad de actores sociales participantes se limitaran a esta reivindicación puntual. Más bien apuntan hacia la necesidad de transformaciones mayores de un modelo económico que atenta contra la reproducción de la vida y la naturaleza; cuestionan los legados coloniales que se mantienen en las jerarquías raciales; llaman a la puesta en práctica del estado plurinacional; y denuncian la violencia hacia cuerpos y territorios de un sistema capitalista patriarcal.

Con el pretexto de paliar los efectos económicos y sociales de la pandemia del COVID-19, el gobierno de Moreno logró la aprobación de duras medidas económicas, incluyendo la liberalización del precio de los combustibles, recortes al gasto social y mayor flexibilización laboral. Aunque se han producido marchas y plantones en contra de estas medidas, surge una nostalgia por octubre dada la menor convocatoria de las mismas, en circunstancias en las cuales el movimiento indígena decide no movilizarse hacia Quito. A pesar de ello, para las y los jóvenes, octubre dejó un aprendizaje sobre la posibilidad de la protesta para transformar el orden social y sobre la importancia de la solidaridad de una multitud de voluntades para sostenerla.

Referencias

- Acosta, Alberto, y John Cajas Guijarro. 2019. "Ajuste del FMI: Cuentas sin cuadrar". *La línea de fuego: Revista digital*. <https://lalineadefuego.info/2019/08/20/ajuste-del-fmi-cuentas-sin-cuadrar-por-alberto-acosta-y-john-cajas-guijarro/>.
- Aguirre Rojas, Carlos Antonio. 2019. "Edward Palmer Thompson en América Latina: sobre la economía moral de las multitudes latinoamericanas". *Autoctonía: Revista de Ciencias Sociales e Historia* 3 (1): 1-15.
- Altmann, Philippe. 2020. "Eleven Days in October 2019: The Indigenous Movement in the Recent Mobilizations in Ecuador". *International Journal of Sociology* 50 (3): 1-7. doi:10.1080/00207659.2020.1752498.
- Calapaqui Tapia, Karla. 2017. *Criminalización de la protesta 2007-2017: Las víctimas del correísmo*. Quito: Dayuma Fundación para la Defensa de los Derechos Humanos.
- Camacho, Fadia, y Joel González. 2020. "Política monetaria y choques de oferta: El fin del super-ciclo de commodities en América Latina". *Revista Económica de Centroamérica y República Dominicana* 1 (1): 61-100. <http://www.secma.org/recard/index.php/recard/article/view/164>.

Chiriboga Tejada, Andrés, y Leonardo A. Arias. 2020. "La ruta al 'paquetazo' y el retorno de la economía fondomonetarista al Ecuador". En *Octubre y el derecho a la resistencia: Revuelta popular y neoliberalismo autoritario*, editado por Franklin Ramírez Gallegos, 69-194. Buenos Aires: CLACSO.

Daher, Antonio, Daniel Moreno y Matías Aninat. 2017. "Efectos socioterritoriales en Chile del súper ciclo de los *commodities* y de su término". *Cadernos Metròpole* 19 (38): 127-155. <https://doi.org/10.1590/2236-9996.2017-3805>.

Defensoría del Pueblo. 2019. *Informe ejecutivo de personas detenidas*. <http://www.portalfio.org/wp-content/uploads/2019/10/Informe-detenidos-paro-nacional-%E2%80%93-Ecuador-October-2019.pdf>.

González Meyer, Raúl. 2019. "Arritmias y recovecos del post-neoliberalismo en América Latina". *Revista de la Academia* 27 (agosto): 42-77. <https://doi.org/10.25074/0196318.0.1313>.

Iza, Leonidas, Andrés Tapia y Andrés Madrid. 2020. *Estallido: La rebelión de octubre en Ecuador*. Quito: Ediciones Red Kapari.

Kingstone, Peter R. 2018. *The Political Economy of Latin America: Reflections on Neoliberalism and Development after the Commodity Boom*. New York: Routledge.

Sanahuja, José Antonio. 2016. "América Latina en un cambio de escenario: De la bonanza de las *commodities* a la crisis de la globalización". *Pensamiento Propio* 44: 13-25.

Sánchez-Ancochea, Diego. 2019. "The Surprising Reduction of Inequality during a Commodity Boom: What Do We Learn from Latin America?" *Journal of Economic Policy Reform*, septiembre, 1-24. <https://doi.org/10.1080/17487870.2019.1628757>.

Svampa, Maristella Noemi. 2013. "Consenso de los *Commodities* y lenguajes de valoración en América Latina". *Nueva Sociedad*, no. 244. <http://ri.conicet.gov.ar/handle/11336/6451>. //

21N: el desborde de la movilización en Colombia

por **Mauricio Archila** | Centro de Investigación y Educación Popular/CINEP | marchila@cinep.org.co

Martha Cecilia García | CINEP | mcgarcia@cinep.org.co

Santiago Garcés | CINEP | sgarcés@cinep.org.co

Ana María Restrepo | CINEP | arestrepo@cinep.org.co

La agitación social y política vivida en Colombia a fines de 2019 tiene raíces históricas en desajustes estructurales de la sociedad y carencias estatales, al menos desde la segunda mitad del siglo XX. Pero ellas se reactivan en un momento propio que no está desligado de lo que ocurrió en otras partes del continente. Veamos entonces lo ocurrido a fines del año pasado en Colombia, no sin antes enmarcarlo en las tendencias históricas de las luchas sociales en el país. Luego miraremos las principales demandas del paro nacional del 21 de noviembre (21N),¹ tanto por sus convocantes como por las multitudes que salieron a protestar en las ciudades y los campos. Cerramos el artículo con unas reflexiones finales.²



Fuente: Base de Datos de Luchas Sociales de CINEP

Como se observa en el gráfico, el 21N viene precedido de un auge en las luchas sociales en Colombia desde 2007 que tuvo su pico en 2013, cuando se dio no sólo el mayor número de protestas registradas en la Base de Datos de Luchas Sociales (BDLS) de CINEP desde 1975, sino un conjunto de paros agrarios que cubrieron todo el país. Aunque las cifras de 2019 no son las más altas, están por encima del promedio anual en los 45 años cuantificados. Y si se pudiera medir con precisión la participación popular, tendríamos que reconocer que la del 21N desbordó cualquier registro histórico. Si bien Colombia no es un país de huelgas nacionales muy frecuentes, las ha habido y más en los últimos tiempos. En cambio, hay una larga tradición de paros locales y regionales, durante mucho tiempo llamados cívicos. El referente histórico es el Paro Cívico Nacional del 14 de septiembre de 1977, que terminó con un saldo trágico de una veintena de muertos. En el pasado 21N no hubo tantas víctimas letales pero se destaca el asesinato del estudiante Dilan Cruz por una bala policial en medio de las protestas. La represión también implicó el toque de queda en varias ciudades y una brutal respuesta policial, como no se había visto en el pasado reciente. Y en todo momento el gobierno estuvo cerrado al diálogo; solo a comienzos de diciembre lo abrió tímidamente. Pero ¿qué se negociaba? Veamos.

¹ En realidad duró varios días, pero el inicio y momento de mayor movilización fue el 21 de noviembre.

² Este artículo es una reelaboración y actualización del publicado en la revista *Cien Días* No. 97, octubre-diciembre, 2019.

Pliego de peticiones

El 21N empezó con la convocatoria a una jornada de protesta lanzada en Bogotá el 4 de octubre que luego conformará el Comando Nacional de Paro integrado por las centrales obreras, organizaciones de pensionados, estudiantiles, cívicas, indígenas y campesinas.

Los motivos del paro, como los concebían originalmente los convocantes, eran rechazar lo que denominaron el “paquetazo” económico del gobierno de Iván Duque (2018–2022) y exigir el cumplimiento integral de los acuerdos de paz con las FARC (Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia). El “paquetazo” se refería a un conjunto de iniciativas gubernamentales, algunas anunciadas y otras ya en curso, tendientes a profundizar el neoliberalismo.³

Respecto a las reformas anunciadas, miembros del gobierno y representantes gremiales afines a la derecha uribista revelaron los posibles contenidos de la reforma laboral y la pensional. La laboral permitiría la contratación por horas, el pago a los jóvenes por debajo del salario mínimo, que se establecería en forma diferencial por regiones, continuando así con la política fracasada de reducir los costos laborales como herramienta para generar empleo y atacar la informalidad. La pensional implicaría aumentos en la edad de pensión y en la cotización así como la eliminación del régimen público de prima media y la obligatoriedad del sistema de ahorros individual, lo que implicaría la subordinación del derecho a la pensión a los intereses de los fondos privados de pensiones.

Otras iniciativas ya se encontraban en curso, como la creación de un “holding financiero” estatal con 19 entidades del sector público, medida que se aprobó en el Plan Nacional de Desarrollo de Duque y que, para los convocantes del paro, implicaba una posible “masacre” laboral en dichas entidades así como la transformación de la estructura corporativa

de las empresas estatales en función de su privatización futura. De igual forma, denunciaban otros artículos ya aprobados de dicho Plan Nacional de Desarrollo, que implicaban elementos velados de reforma laboral y pensional. Respecto al proceso de paz con las FARC, los convocantes del paro le exigían al gobierno el cumplimiento de los acuerdos, el respeto a las instituciones emanadas del mismo, y medidas urgentes para detener el asesinato de líderes sociales y de excombatientes.

Sin embargo, el pliego que el Comité Nacional de Paro presentó al presidente Duque el 26 de noviembre, tras varios días de movilizaciones que desbordaron las expectativas de los convocantes y del gobierno, incluyó exigencias adicionales como la eliminación del Escuadrón Móvil Antidisturbios (ESMAD) y la depuración de la policía; la definición de las políticas ambientales con las organizaciones del sector; el trámite inmediato en el Congreso de la República de los proyectos de ley anticorrupción; y el cumplimiento inmediato de los acuerdos firmados con estudiantes, indígenas, campesinos, maestros y otros sectores sociales.⁴

La multiplicidad de demandas previas



El Paro Nacional, desde el primer día, concitó la presencia de múltiples sectores sociales que desplegaron una enorme diversidad de demandas, no todas contempladas en los pliegos de peticiones ya señalados. Este es un hecho

frecuente en los paros cívicos colombianos por las características de los mismos: no es un solo sector el que convoca sino una convergencia de actores sociales, lo que posibilita la participación de una miríada de sujetos colectivos. No hay una sola demanda sino un conjunto de reivindicaciones que, en ocasiones, logran articularse en petitorios

³ Ver la declaración del Encuentro Nacional de Emergencia del 4 de octubre, <https://www.polodemocratico.net/nuestras-noticias/103-nacionales/13658-declaracion-del-encuentro-nacional-de-emergencia-del-movimiento-social-y-sindical-4-de-octubre>.

⁴ Ver pliego presentado al presidente: <http://www.paronacional.com/agenda-del-comite-nacional-de-paro-con-presidencia-de-la-republica/>.

acotados pero, casi siempre, se expresan grupos sociales cuyas vindicaciones exceden por mucho los marcos de peticiones concertadas (Fig. 1).⁵

Como hemos dicho, las demandas presentadas el 21N tienen una larga historia. Algunas mostraron el cansancio por asuntos irresueltos o agravados, pero de larga data. Pusieron en evidencia que la gente no aguanta más situaciones de inequidad, violencia, injusticia. Aquí se hará referencia a algunas demandas, que se enunciaron antes del 21N, apoyándonos en información de la BDLS del CINEP, y que se expresaron en las calles colombianas en el Paro Nacional (Figs. 2, 3).



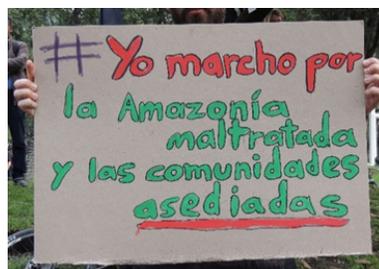
Esta pancarta recordaba que del 5 al 12 de agosto de 2019, una Caravana Humanitaria se desplazó desde Medellín hasta Riosucio (Chocó), con el objetivo de visibilizar la grave crisis humanitaria y el abandono estatal que padece esta zona del país ubicada en la costa pacífica (Fig. 4).



En este cartel se recordaba la lucha de años recientes emprendida por comunidades indígenas Wayuu, afrodescendientes, y campesinas de La Guajira, al norte del país, para frenar el proyecto de la multinacional Carbones del Cerrejón de desviar el río Ranchería y el arroyo Bruno para sacar carbón de sus lechos. Eso también es violencia como reza la pancarta (Fig. 5).

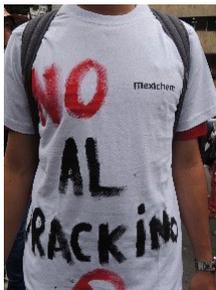


También durante el 2019, ambientalistas y colectivos escénicos llevaron a cabo movilizaciones en varias ciudades, incluida Bogotá, para rechazar la tragedia ambiental ocurrida en la Amazonía, producto de los incendios forestales a gran escala, para tomar conciencia de la catastrófica deforestación del pulmón del mundo, y reclamar al gobierno colombiano una acción urgente ante el daño. También solicitaron al gobierno de Duque que cumpla los compromisos del Acuerdo de París, encaminados a proteger áreas de cuidado ambiental (Fig. 6).



⁵ Figs. 1-18: Fotografías de Martha Cecilia García, tomadas en Bogotá el 21 de noviembre de 2019.

En el primer año de gobierno de Duque se llevaron a cabo cinco movilizaciones campesinas contra el uso de glifosato para erradicar cultivos de uso ilícito y, de paso, exigir el cumplimiento del Punto Uno del Acuerdo de Paz con las FARC sobre Reforma Rural Integral, plan de sustitución voluntaria, gradual y concertada con los pequeños sembradores de coca (Fig. 7).



Durante el primer semestre de 2018 se realizaron seis protestas contra el *fracking* y para pedir a la empresa estatal de petróleos que sepultara la idea de abrir pozos pilotos con esta técnica. Y tras una protesta en varios departamentos del centro del

país en contra del inicio de la exploración de hidrocarburos con la técnica del *fracking*, la Agencia Nacional de Hidrocarburos informó que allí no se tenía previsto desarrollar ninguna actividad con dicha técnica (Fig. 8).

Detener el asesinato de líderes ambientales y sociales, la protección de los páramos, el agua y el respeto a las consultas populares también fueron motivos para que los ambientalistas salieran el 21N a las calles y los campos (Figs. 9, 10).



Niñas, niños, adolescentes también marcharon el 21 de noviembre para recordarnos que tan solo entre 2018 y 2019 se han registrado 14 movilizaciones. Nueve de ellas en lo que va corrido de

este gobierno, en las cuales se denunció el maltrato y la violencia contra niños, niñas y adolescentes, incluidas la explotación sexual y la violación sexual. En cinco movilizaciones se denunció que tal violencia terminó en asesinatos (Fig. 11).

Entre 2018 y 2019, ha habido 39 movilizaciones para denunciar la violencia de género y feminicidios, y para develar que la guerra contra las mujeres ha arremetido.

Una de las poblaciones más afectadas por el desconocimiento de su "otredad" es la LGBTIQ, especialmente la población transgénero. Entre 2018 y 2019 estos colectivos realizaron siete manifestaciones y en todas pidieron no ser discriminadas (Fig. 12).



El 21N también ha posibilitado la expresión de inconformidades locales y particulares de ciertos sectores sociales. Por ejemplo, los recicladores de Bogotá se manifestaron el 21 de noviembre y recordaron protestas anteriores como la del 21 de mayo anterior, en torno a las normas urbanísticas que se les exige para la regularización de sus bodegas reciclaje.

En el sector académico, desde finales de septiembre de 2019, estudiantes de la Universidad Distrital de la capital protestaron contra la corrupción en ese centro educativo. A comienzos de noviembre, se declararon en paro indefinido y protestaron en la Alcaldía de Bogotá para pedir acciones concretas frente a los actos de corrupción.

Simultáneamente, varios alumnos de esa misma universidad tomaron la sede principal como parte de su protesta por esos manejos irregulares. La represión a esas marchas involucró a estudiantes de la Universidad Javeriana que, solidarios, se sumaron a las protestas. Esto produjo un significativo acercamiento entre estudiantes de instituciones de educación superior privadas y públicas, algo que también continuó en el 21N (Fig. 13).



La petición de desmontar el ESMAD no era nueva. Esta petición vino incentivada, sobre todo, por la muerte de indígenas y estudiantes a manos de miembros de ese escuadrón policivo. A ello se sumó el rechazo de la violencia con la que fueron reprimidas las marchas estudiantiles de 2018. Luego, desde finales de septiembre de 2019, los universitarios marcharon para ratificar la petición de desmontar ese cuerpo policial, después de la manera violenta como intentaron acallar una manifestación de la Universidad Distrital con la que se solidarizaron estudiantes de la Universidad Javeriana. Durante el paro nacional del 21N, esta demanda no cesó de aparecer y se intensificó esta petición tras la muerte del estudiante Dilan Cruz por un agente del ESMAD el 23 de noviembre (Fig. 14).



Hubo otras protestas referidas a acciones policivas previas a la jornada del 21N: en concreto la diligencia de allanamiento que, dos días antes del paro, adelantó la policía en coordinación con la Fiscalía General de la Nación, a medios alternativos y universitarios de comunicación, a centros culturales y colectivos artísticos en distintas ciudades del país, a lo que se sumaron amenazas colectivas de distintos tipos que intentaban infundir miedo y frenar la movilización nacional. Pero ello tuvo un efecto contrario y hasta los títeres salieron a protestar (Fig. 15).



“¿Quiénes somos?
¡Los títeres!
¿A qué vinimos?
¡A marchar!”
(Figs. 16, 17)



Muchos carteles como este se vieron en el 21N. En ellos se expresa la intención de no terminar el paro “hasta que la dignidad se haga costumbre”, lo que debía pasar por un diálogo sobre la base de escuchar los reclamos sociales. Algo que el gobierno ofreció pero no cumplió (Fig. 18).



El 21N en otros escenarios

Además del protagonismo de las ciudades principales, el 21N tuvo dimensiones regionales y sectoriales que es bueno analizar. Así, por ejemplo, diversos pueblos indígenas fueron convocados por la ONIC (Organización Nacional Indígena de Colombia) o por sus autoridades propias a lo largo del país. Sus demandas centrales fueron el freno al asesinato de indígenas, el cumplimiento de los acuerdos con las comunidades y del capítulo étnico del Acuerdo de Paz; denunciaron también el desplazamiento de algunas comunidades originarias, exigieron la protección del agua y la biodiversidad, y con esto denunciaron la afectación de sus territorios por el modelo de desarrollo extractivista.

El pueblo afrocolombiano realizó igualmente grandes movilizaciones en varias ciudades contra el “genocidio estadístico” del último censo de 2018 en el que la población afrodescendiente fue mucho menor a la del censo anterior; lo que se debería a la falta de una perspectiva étnica en la formulación del cuestionario y la recopilación de la información. También exigieron el cumplimiento de los acuerdos de recientes Paros Cívicos de Buenaventura y Quibdó mientras denunciaron el asesinato de líderes y lideresas sociales. Es importante resaltar que en la marcha del 21N en

Bogotá, los pueblos étnicos decidieron salir en bloque: indígenas y afros se unieron para exigir su reconocimiento y autodeterminación.

En este punto se puede preguntar sobre la representatividad del campesinado en el Comité de Paro y sobre si demandas urbanas como el “paquetazo” de Duque interesan a las poblaciones rurales. Ambas preguntas se responden positivamente. Así la Asociación Nacional de Zonas de Reserva Campesinas convocó a la movilización para exigir el cumplimiento de acuerdos que dieron fin a movilizaciones anteriores y reconocieron los derechos de los campesinos. En varias ciudades la participación campesina fue también una forma de respaldo del mundo rural a las luchas urbanas.

Como ya vimos, otras movilizaciones en el marco del 21N dieron cuenta específicamente de problemas locales o regionales. Así se denunciaron problemas de servicios públicos y transporte, daños ambientales por el extractivismo minero y los megaproyectos como grandes vías y represas.

Finalmente, es importante resaltar el protagonismo que los movimientos y organizaciones de mujeres tuvieron en algunas regiones, donde las luchas por los derechos de las mujeres rurales y urbanas, entre ellos el derecho a una vida libre de violencias, lideraron la convocatoria. En Medellín también se convocó al paro con acento feminista. Esta actividad no quiere decir que solo allí se hicieron visibles las mujeres; por el contrario, en muchas marchas fueron el rostro mayoritario de las multitudes.

Conclusión

Lo que este artículo ha mostrado es el desborde de las peticiones proclamadas por la gente en las marchas del 21N y días siguientes. Aun teniendo en cuenta la ampliación del pliego, las movilizaciones han rebasado por mucho a las organizaciones sociales y políticas que convocaron el paro ¿Qué hay detrás de este desborde? No hay duda de que los efectos de décadas de neoliberalismo juegan un papel significativo, especialmente en términos de la profundización de la desigualdad social. La persistencia del modelo

extractivista y depredador del medio ambiente, es otro motivo de disputa desde hace años y se expresó también en los reclamos. Sin embargo, la situación socioeconómica oprobiosa no es una novedad y en cualquier caso no permitiría explicar mecánicamente el surgimiento de unas movilizaciones de esta magnitud. Muchos de esos reclamos venían formulándose desde antes, como hemos visto a partir de las pancartas enarboladas el 21N.

También, en el caso colombiano se aducen razones como una crisis del régimen político derivada no tanto de la inexperiencia de Iván Duque para gobernar, sino por estar sometido al mandato del jefe de su partido, Álvaro Uribe Vélez. La ausencia de pactos con los partidos de centro-derecha limita su capacidad de maniobra en el congreso y, con la rama judicial, tampoco ha tenido un acercamiento armonioso. Esto no es sino la expresión en Colombia del desgaste de la democracia parlamentaria y la recuperación de las calles como espacios de participación directa ciudadana.

Otra interpretación posible es que dichos factores económicos, políticos y sociales se han articulado con la transición que implicó el fin de la guerra con las FARC. Los años de negociación y de implementación, a pesar de las dificultades, transformaron la agenda política del país y han permitido no solo que se le pierda miedo a la violencia en las calles, sino que emerjan con mayor ímpetu demandas sociales postergadas. En este contexto, realidades como el retorno del uribismo al poder con Duque, la persistencia y agudización de la violencia contra líderes sociales, la renuncia a la implementación del acuerdo de paz y la precaria negociación con varios actores sociales, profundizan el malestar de una parte considerable de la sociedad colombiana, pues se alejan de la idea de transición política implícita en los acuerdos de paz firmados en 2016.

En todo caso, parece que más allá de los motivos plasmados en las pancartas o los consignados en los pliegos formales de petición, hay una multiplicidad de demandas que no fueron negociadas, no tanto por su amplitud, sino porque apuntaban a modificaciones fundamentales del modelo de desarrollo y de

democracia colombianos. En eso nos acercamos a las movilizaciones recientes de países vecinos, especialmente en Ecuador, Chile y Bolivia. No decimos que las multitudes colombianas sean de izquierda o que estén por una forma de socialismo, pero que ciertamente los variados motivos de la movilización nos llevan a un horizonte muy amplio de expectativas, como tal vez no se había visto desde finales del siglo XX y comienzos del XXI. Seguramente muchas de esas demandas van a seguir sin ser satisfechas, al menos en lo que resta de este gobierno. Pero algo que se ha logrado es perderle el miedo a protestar en público.

Este panorama sugiere algunos interrogantes que deberán ser abordados en futuras investigaciones. Por ejemplo, ¿cómo se modificó la protesta en los tiempos del COVID-19 teniendo en cuenta no solo su aparente disminución, sino la mutación de las demandas, los repertorios y los participantes? Pero sobre todo, ¿cómo explicar el rápido paso de una lucha social contenida por los confinamientos obligatorios a un estallido tan radical como el del 9 y 10 de septiembre en las principales ciudades, ante la violencia policial? ¿Qué rupturas y continuidades encierran estos eventos recientes? //

“¿Dónde está el dinero de PetroCaribe?” Protestas en Haití

por **Handerson Joseph** | Universidad Federal de Amapá | handersonj_82@yahoo.es

El 17 de octubre de 2018, fecha del asesinato del emperador Jean Jacques Dessalines,¹ miles de personas en el territorio nacional y en la diáspora haitiana se congregaron a través del movimiento “*kote kòb Petwo Karibe a?*” (¿Dónde está el dinero de PetroCaribe?). El carácter multifacético de las reclamaciones en las calles y la diversidad de agentes y grupos hicieron que las protestas contra la corrupción y las formas de gobernar al país fuesen únicas.²

Es preciso tener en cuenta que durante el paso del siglo XVIII al XIX, mientras Francia predicaba los ideales de libertad, igualdad y fraternidad, y seguía manteniendo esclavizados y subyugando a los negros, Haití estaba en llamas en una revolución mucho menos utópica, pero que, en la práctica, imprimía conceptos concretos a los Derechos Humanos. El país tuvo una de las revoluciones más exitosas en la historiografía mundial. La primera y única revolución que asoló a una de las mayores tropas del mundo, la de Napoleón Bonaparte, independizándose el primero de enero de 1804.

Después de más de 200 años, el país enfrenta una grave coyuntura sociopolítica y económica. Desde la Independencia de 1804 hasta el 2020, durante 216 años, Haití solamente ha tenido dos presidentes elegidos democráticamente y que

hayan logrado terminar sus mandatos, René Préval (1996–2001, 2006–2011) y Michel Joseph Martelly (2011–2016). Esta situación representa una de las contradicciones históricas y emblemáticas del país. Si, por un lado, en las páginas de la historia haitiana, escrita por negros, se encuentran los primeros significados pragmáticos de Democracia, Libertad y Derechos Humanos —la única revolución conducida y nación creada por personas esclavizadas— por otro lado, hace más de un siglo que la democracia y los derechos humanos entraron en colapso en el país. Varios informes de organismos internacionales, principalmente de la Organización de los Estados Americanos (OEA) y de la Organización de las Naciones Unidas (ONU), denuncian abusos contra los derechos humanos, violencia sin precedentes y el deterioro de la vida económica y agrícola. Todo esto nos permite comprender la relación de interdependencia del país, principalmente con los Estados Unidos.³ Como muestra Laënnec Hurbon,

Las prácticas coloniales han sido un verdadero “*habitus*” (en el sentido de la sociología de Bourdieu) de la “comunidad internacional” en Haití desde al menos 1915, el año de la ocupación estadounidense. Como si la soberanía adquirida sobre la base de los heroicos sacrificios de la guerra por la independencia (1791–1804) se desintegraran paulatinamente hasta el

¹ Uno de los líderes de la revolución que proclamó la independencia del país y su primer gobernante. A principios del año 1805, los blancos fueron masacrados por orden de Dessalines, quien emprendió una campaña contra los franceses en el país.

² Gran parte de los argumentos en este artículo son parte de mi entrevista a la *Revista IHU On-line*: “Haiti: uma história de lutas silenciadas que podem ser ainda sufocadas na pandemia”, *Revista do Instituto Humanitas Unisinos*, 23 de mai 2020, <http://www.ihu.unisinos.br/159-noticias/entrevistas/599187-haiti-uma-historia-de-lutas-silenciadas-que-podem-ser-ainda-sufocadas-na-pandemia-entrevista-especial-com-handerson-joseph>.

³ La primera ocupación extranjera en el país se remonta a principios del siglo XX. Las fuerzas armadas norteamericanas ocuparon el país de 1915 a 1934. En 1994, tras el golpe de Estado del ex presidente Jean-Bertrand Aristide, el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas autorizó, mediante la Resolución 940, una ocupación militar en el país liderada por las fuerzas armadas estadounidenses. La más reciente fue la Misión de las Naciones Unidas para la Estabilización en Haití (MINUSTAH) de 2004 a 2017, mediante la Resolución 1524. La misión, liderada por Brasil, estuvo compuesta por tropas de unos 21 países, entre ellos España, Guatemala, Paraguay, Bolivia, Uruguay, Chile y Argentina.

punto de que hoy quedan reducidos a un triste nada. La precariedad de esta soberanía se vivió muy temprano con la reanudación del modelo colonial, a pesar de que la revolución haitiana se basó en una perspectiva antirracista y anticolonial. Por otro lado, desde 1825, el país había trabajado durante más de un siglo para pagar la escandalosa indemnización a los antiguos esclavistas. Si no volvemos a este trasfondo histórico, me parece imposible, si no difícil, comprender el escenario político actual en Haití y las marcadas desigualdades sociales que despertaron el asombro de cualquier observador extranjero. (Hurbon 2020, 1)

Por ello, en este texto examino la dinámica de las protestas en Haití de octubre de 2018 a 2019. Muestro los diferentes agentes involucrados, los diversos factores que movilizaron las manifestaciones, y cómo la violencia se volvió endémica en los paisajes haitianos, sus consecuencias sociopolíticas y sus efectos sobre la economía y la seguridad, aspectos centrales que acentúan las inestabilidades y desigualdades. También muestro cómo hay un silencio internacional en relación a las protestas haitianas y que éstas se presentan de manera diferente, en comparación con otros países latinoamericanos. Un conjunto de conceptos como *ensekirite* (inseguridad), *vyolans* (violencia), *dezòd* (desorden), *kriz* (crisis) y *enstabilite* (inestabilidad) están intrínsecamente asociados a las protestas, en términos de Pedro Braum, “conforman un extenso campo de categorías, fenómenos y prácticas que pueblan la vida de las personas” en Haití (2019, 132).

Génesis de las protestas

En julio de 2018, en respuesta al deterioro de la situación socioeconómica —reflejada por un déficit presupuestario que alcanzó el récord de \$89,6 millones, una mala gestión del gobierno y unas denuncias de corrupción por el desvío estimado de 3,8 millones de dólares americanos, involucrando autoridades políticas en el Fondo PetroCaribe— surgieron varias manifestaciones inicialmente movilizadas por los partidos de oposición.⁴

A mediados de octubre de 2018, las protestas ganaron intensidad a medida que reunían a diversos actores, personas de diferentes clases sociales, generaciones y géneros. Las protestas se articularon a través de grupos políticos y sociales (organizaciones, movimientos), culturales (artistas, pintores), religiosos (sacerdotes católicos, pastores, vuduistas), musicales (cantantes, músicos) y de escritores e intelectuales haitianos unidos por una misma causa: a favor de Haití. Se hicieron marchas, hubo enfrentamientos con las fuerzas represivas del gobierno, y se pidió la renuncia del actual presidente Jovenel Moïse (inicio de su mandato en 2017) acusándolo de impunidad y de corrupción al respecto del dinero de PetroCaribe, de devaluar el salario mínimo, de ser el responsable de las personas asesinadas y heridas durante las manifestaciones, de violencia y del uso de la propia fuerza del gobierno para mantener la hegemonía política y el poder.⁵

Más del 80 por ciento de los productos básicos del país son importados, especialmente alimentos, principalmente de Estados Unidos, República Dominicana y China.⁶ La inflación venía creciendo desde finales de 2018, así como la devaluación de la moneda nacional, el gourde. En 2019, el aumento de los precios se estimó en aproximadamente un 20 por ciento y el gourde se depreció en más del

⁴ PetroCaribe es una alianza petrolera entre algunos países del Caribe y Venezuela, este último país proporciona suministros de petróleo a los miembros de la alianza con base en un acuerdo financiero concesionario. “#PetroCaribeChallenge: Première grande manifestation anti-corruption en Haïti”, *AlterPresse*, 17 de octubre 2018, <https://www.alterpresse.org/spip.php?article23677#.X2SyPWhKjIU>.

⁵ Ver el reporte del Bureau des Avocats Internationaux e Institut e Institute for Justice and Democracy in Haiti: “Haïti à un carrefour: Une analyse des moteurs de la crise politique en Haïti”, 2019. Disponible en: <http://www.ijdh.org/wp-content/uploads/2019/06/IJDH-Political-Crisis-Report-May-2019-FR-1-2-1-1.pdf>.

⁶ Banque de la République de Haïti, “Note sur la politique monétaire”, janvier-mars 2020, https://www.brh.ht/wp-content/uploads/note_polmon2t20.pdf. Acceso el 14 de junio de 2020.

25 por ciento.⁷ En octubre de 2019, la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO) emitió una alerta, advirtiendo que, debido a la emergencia alimentaria, 3,7 millones de personas en Haití necesitaban acciones urgentes para preservar sus vidas. La FAO dijo que, si no se hacía nada, esta situación empeoraría drásticamente (Joseph y Neiburg 2020).⁸

Algunas de las formas en que la población reacciona frente a estas desigualdades y a las condiciones que se presentan son a través de la violencia y de la ocupación de las calles por medio de manifestaciones, del *dechoukaj* (invasiones, saqueos), la quema de neumáticos (*pèlebren*) y de automóviles. Para comprender el origen de estas protestas, es necesario entender cómo los fracasos políticos de los últimos años dieron lugar a manifestaciones, y cómo estos fracasos fueron posibilitados por las injusticias estructurales de largo plazo, un sistema judicial disfuncional y políticas económicas nacionales y exteriores que empobrecieron a la mayoría de la población.

De todos modos, si antes la vida en el país era difícil, la situación se agravó de agosto a noviembre de 2019, y tuvo un impacto grave en el funcionamiento de instituciones, establecimientos, servicios públicos y privados que tuvieron que cerrar: escuelas, universidades, restaurantes, gasolineras, bancos, empresas, tiendas, hospitales, aduanas y aeropuertos —para usar la expresión haitiana, *Peyi lòk* (literalmente, el país estaba bloqueado). Este bloqueo ocurrió antes de la pandemia y continuó de manera diferente durante la crisis sanitaria causada por la COVID-19.

Silenciando las protestas haitianas

En octubre de 2019, varios países vivieron momentos de resistencia y protesta. Sin embargo, los medios internacionales no abordaron las pautas de la sociedad haitiana, destacaron el escenario de Ecuador, Argentina, Bolivia, Chile, España, Argelia, Irak y Libano. Los escasos artículos escritos

por periodistas o académicos volvieron a reforzar los estigmas, utilizando expresiones como “Haití está en el caos”, “Rebelión en Haití”, “La violencia vuelve a apoderarse de Haití”, “Hambre y miseria se apoderan del país”.

En ese momento varios jefes de Estado se posicionaron políticamente en relación a la situación que ocurría en otros países de América del Sur, Europa y Asia, pero hubo un silencio sobre los hechos en Haití. Entre bastidores, el “*Core Group*”, integrado por representantes de la ONU, Brasil, Canadá, Francia, Alemania, España, y por la Unión Europea, Estados Unidos y la OEA, defendió la permanencia del gobierno haitiano, contribuyendo para que persistiera en el poder.

Mientras que las personas que tomaron las calles y aquellos que resultaron heridos y asesinados en Chile, Ecuador, entre otros países, fueron vistos como mártires, las personas que lucharon por los derechos sociales y políticos en Haití, fueron vistos como incapaces de decidir sobre su propio futuro y mantener la estabilidad política. Sin considerar las causas profundas de la situación del país que el propio neocolonialismo ha contribuido a mantener a lo largo de la historia.

En efecto, gran parte de la intervención militar extranjera en el país ha sido movilizada por sucesivos golpes de estado, inestabilidad política y violencia. Además, desde el punto de vista histórico-político, no hay duda de que los intereses neocoloniales están detrás de las diversas ocupaciones extranjeras en el país. Existe un proyecto político internacional para el silenciamiento y aniquilación de Haití (Trouillot 1995). El éxito político, económico e industrial del país habría puesto en tela de juicio los pilares de la colonización territorial en África y su misión civilizadora. Por eso Haití debería nacer muerto para legitimar la discapacidad genética de los negros.

⁷ En el 2010, un dólar americano era equivalente a 40 gourdes, en 2020, alcanzó 115 gourdes. La Banque mondiale en Haïti, “Haïti présentation”, <https://www.banquemondiale.org/fr/country/haïti/overview>. Acceso el 14 de junio de 2020.

⁸ “IPC Alert on Haiti”, Integrated Food Security Phase Classification, October 2019, <http://www.ipcinfo.org/ipcinfo-website/ipc-alerts/issue-14/en/>.

Los silencios históricos, mediáticos y políticos, y las exacerbaciones de la pobreza, la violencia, las luchas de poder y la fragilidad del Estado haitiano, son guiados por intereses neocoloniales y modelos político-económicos que tienen como oxígeno el racismo estructural, persistiendo en evidenciar que una nación negra no podría funcionar. Serían los doblemente condenados de la tierra, por ser negros y por constituir una nación negra. Sigue siendo una forma de mantener la opresión y alienación psíquica de las poblaciones negras del mundo, silenciando y evitando la difusión del liderazgo y del protagonismo de los haitianos negros, como hemos visto en varios países que han logrado su independencia con la contribución directa de Haití o indirectamente, por haber sido inspirados en la revuelta de estos negros. La Revolución Negra generó el temor de que Haití fuera el referente de la lucha por la liberación de los negros a nivel mundial, por su carácter incompatible con el poder colonial.

Es necesario dar visibilidad y reconocer la lucha histórica y actual de los haitianos, como actores y protagonistas contra el colonialismo y el necroliberalismo que se les impone, reconocer la capacidad de articulación y de organización de los movimientos sociales y políticos en el país, reconocer la conciencia política y la lucha de clases y de color en el país, la lucha en favor de la democracia y contra las desigualdades y reconocer las contradicciones impuestas al país y el fracaso de las diversas intervenciones internacionales que tuvieron lugar en Haití.

Las redes sociales

Con las tecnologías de la información y de la comunicación, las reacciones relacionadas a los silencios son inmediatas. Las denuncias contra autoridades gubernamentales involucradas en actos de corrupción a través de recursos de PetroCaribe tomaron una gran proporción en las redes sociales en agosto de 2018, a través de los *hashtags* “#kote kòb Petwo Karibe a?” y “#PetroCaribeChallenge”, inicialmente publicados por artistas y músicos haitianos en *Twitter*, *Facebook*, *Instagram*, *Whatsapp* y reproducidos por miles de personas. Las redes sociales han jugado un papel importante en el proceso de des-

silenciar a Haití. Los haitianos se han apropiado de estas herramientas para conectarse cada vez más con el mundo, porque durante muchas décadas fueron mantenidos en aislamiento, como vidas precarias, sujetas a silenciamiento.

La diáspora haitiana tuvo un papel crucial en la movilización de las protestas. Inicialmente, los *hashtags* fueron escritos y divulgados en Estados Unidos por el cineasta haitiano Gilbert Mirambeau, quien viajó a Haití para participar en la manifestación del 17 de octubre de 2018. Simultáneamente a las manifestaciones en Haití, se organizaron varias marchas en Estados Unidos (Miami y Nueva York), Canadá (Montreal), Francia (París), además de movilizaciones virtuales organizadas en otros países. Personas migrantes haitianas, a pesar de estar físicamente lejos de Haití, continúan manteniendo vínculos emocionales, socioeconómicos y políticos con el país (Glick-Schiller y Fouron 2001; Joseph 2015).

Contradicción

La actual situación sociopolítica del país se mantiene atravesada por la principal e histórica contradicción de la oposición entre las clases dominantes, la minoría que ve y piensa como europeos, norteamericanos o canadienses, y el pueblo representado por la mayoría de la población, pero sometido a una pequeña oligarquía orientada al exterior, y que en gran medida ni siquiera vive en Haití. Como muestra Omar Ribeiro Thomaz, “Esta orientación cosmopolita se mantiene no sólo en los viajes a Estados Unidos —una forma de garantizar un cierto nivel de consumo— sino también en el universo relacional establecido en Puerto Príncipe. Son parte de un circuito sofisticado que incluye diplomáticos, profesionales y trabajadores humanitarios extranjeros” (2005, 140).

Los primeros están representados principalmente por una élite económica, cultural e intelectual, generalmente en disputa por el poder económico y político, siendo responsable por gran parte de las decisiones sobre el destino del país. Esta oligarquía actúa generalmente de acuerdo con los intereses de la comunidad internacional. Es ella quien domina los cargos públicos, los principales servicios

sociales y el comercio exterior. La lengua francesa es también el medio por el cual la élite haitiana se revela y se posiciona en la jerarquía social, reproduciendo la situación colonial del antiguo sistema esclavista. El pueblo suele hablar solo criollo y no domina el francés.

La distribución socioespacial haitiana revela las relaciones y jerarquías de dominación en el país. Gran parte de la élite residente en el territorio nacional se encuentra en las montañas y el pueblo en las zonas planas y bajas inundables, generalmente afectadas por la crisis ambiental como huracanes, tormentas y terremotos. Y desde sus ventanas, los miembros de la élite controlan los movimientos políticos y las redes comerciales.

Conclusiones

A dos años de la manifestación del 17 de octubre de 2018, en tiempos de pandemia de la COVID-19, el país continúa experimentando múltiples violencias y protestas en diferentes escalas, especialmente en los niveles social, económico y político. Ha habido un aumento significativo de muertes y delitos violentos, producto de los conflictos armados entre grupos rivales de diferentes matices políticos, del enfrentamiento entre estos últimos y las fuerzas de seguridad del Estado, principalmente por la constante polarización a favor y en contra del actual gobierno. La violencia se fusiona con la historia social haitiana. Según Jean Casimir, "La violencia ha jugado un papel a lo largo de la historia de Haití que difícilmente puede ser olvidada. Las plantaciones de esclavitud no pueden operar sin una organización global de la violencia, con el objetivo de imponer un "orden" que permita a las estructuras políticas determinar la forma y el funcionamiento de las estructuras económicas e ideológicas" (2001, 359).

La violencia se convierte en una de las palabras clave, caracteriza las relaciones de poder y de control de los territorios. Es movilizadora por grupos civiles para presionar al Gobierno y acceder a recursos económicos, pero también se convierte en una estrategia política del Gobierno para garantizar el mantenimiento del orden actual, mediante la cual se controlan las manifestaciones y protestas.

Esto demuestra que el Gobierno está lejos de comprometerse con la democratización de las instituciones estatales, los derechos humanos, la estabilidad política, la lucha contra la corrupción y el desarrollo socioeconómico del país. Sin embargo, como muestra Pedro Braum (2019), en respuesta a los riesgos de muerte, violencia y conflicto armado en determinadas regiones del país, la sociedad civil se involucra a diario en iniciativas que buscan mantener el orden, la estabilidad, seguridad y paz, principalmente a través de proyectos sociales que abordan el tema de la mediación de conflictos y los acuerdos de paz.

Desnaturalizar la violencia y el silencio histórico, político y epistémico en relación a Haití exige una posición radical anticolonial y en contra de las sociedades hegemónicas, desde el punto de vista racial, económico, político y académico. Es urgente repensar los conceptos de violencia, silencio, libertad y democracia en términos y prácticas de los pueblos del Sur Global.

Referencias

- Braum, Pedro. 2019. "Frustração". En *Conversas etnográficas haitianas*, organizado por Federico Neiburg, 131-158. Rio de Janeiro: Papéis Selvagens.
- Casimir, Jean. 2001. *La culture opprimée*. Port-au-Prince: Fondation Connaissance et Liberté.
- Glick-Schiller, Nina, e Georges Eugene Fouron. 2001. *Georges Woke Up Laughing: Long-Distance Nationalism and the Search for Home*. Durham, NC: Duke University Press.
- Hurbon, Laënnec. 2020. "Pratiques coloniales et banditisme legal em Haïti". *Mediapart*, 7 de octubre. <https://blogs.mediapart.fr/laennec-hurbon/blog/280620/pratiques-coloniales-et-banditisme-legal-en-haiti>.
- Joseph, Handerson. 2015. "Diaspora: As dinâmicas da mobilidade haitiana no Brasil, no Suriname e na Guiana Francesa". Tese de doutorado em Antropologia Social, PPGAS, Museu Nacional/ Universidade Federal do Rio de Janeiro, Rio de Janeiro. https://www.academia.edu/15267521/Tese_de_doutorado_Diaspora_As_din%C3%A2micas_da_mobilidade_haitiana_no_Brasil_no_Suriname_e_na_Guiana_Francesa.
- Joseph, Handerson, e Federico Neiburg. 2020. "I'm Going to Die in the Street": Haitian Lives in the Pandemic". Traducido por David Rodgers. *City & Society*, 3 de julio. <https://anthrosource.onlinelibrary.wiley.com/doi/epdf/10.1111/ciso.12314>.
- Thomaz, Omar Ribeiro. 2005. "Haitian Elites and Their Perceptions of Poverty and of Inequality". En *Elite Perceptions of Poverty and Inequality*, editado por Elisa P. Reis y Mick Moore. London: Zed Books.
- Trouillot, Michel-Rolph. 1995. *Silencing the Past: Power and the Production of History*. Boston: Beacon. //

Proposed Changes to the LASA Constitution and Bylaws

The Executive Council (EC) of LASA, at its most recent meeting, approved the following proposed changes in the Constitution and Bylaws of the Association to accomplish the following:

- To increase the EC members' terms from two to three years starting from the elections for 2022.
- To include the meeting/assembly of LASA Section Chairs in the LASA statutes.
- To elect two section advisory representatives of the EC and to include this information in the LASA statutes.

Objections can be directed to LASA Executive Director, LASA, 416 Bellefield Hall, 315 S. Bellefield Ave., Pittsburgh, PA 15213, or lasa@lasaweb.org. The cutoff date for receipt of objections to the below proposed change is January 26, 2021.

Constitution

Article V. Executive Council

1a. The Executive Council shall consist of: eleven voting members (the Immediate Past President, President, Vice President, Treasurer, a Graduate Student, and six elected members), and the following ex officio members with voice but no vote: the LASA Executive Director, the Editor of the Latin American Research Review, the current Congress Program Chair(s), the Editor(s) of the Latin American Research Commons (LARC), the Strategic Plan Oversight Committee, and two section advisory representatives.

1b. The terms of the six elected members shall be for three years. Two shall be elected every year by electronic ballot as prescribed in the Bylaws.

Bylaws

Article I. Nominations

8. Members of the Executive Council shall be nominated according to the following procedure:

a. The Nominating Committee shall nominate four candidates for each election for two vacancies on the Executive Council for three-year terms;

Article II. Elections

2. Of the candidates for the Executive Council on the ballot, the two receiving the highest number of votes shall be declared elected to the Council for the ensuing three years. The two receiving the next highest number of votes in that order shall be alternates for one year to serve in the event of temporary inability of a regular member of the Executive Council. //

The Latin American Studies Association: Financial Overview

[DISCLOSURE: This narrative was prepared in December 2019 (pre COVID-19) at the time of the Executive Council meeting by the Chair of the Development Committee, Charles R. Hale; LASA Treasurer, Diego Sánchez-Ancochea; and Executive Director, Milagros Pereyra; with the support of LASA's accountant, Sharon Moose. Financials for the Fiscal Year ending October 2020 will reflect the losses that LASA has endured due to the pandemic.]

LASA stands at a crossroads. Defying predictions and prognoses from distinct quarters of academia, the field of Latin American area studies is as vibrant as ever, measured by our Association's membership, institutional strength, programmatic innovation, and dynamic expansion across the globe. The foundation of this vibrancy is sound budgetary conditions sustained by an increasingly diversified revenue flow, effective administration, and forward-looking strategic planning. LASA has an annual budget of approximately US\$2 million, an endowment of over US\$5 million that generates income for institutional commitments, an operational reserve equivalent to our annual budget, and a recently acquired building which will house the Association's headquarters and a small Latin America-oriented cultural center (see Appendix A for more information). The crossroads we face—a product of remarkable institutional transformation over the past decade—is defined by two principal factors: a radically distinct membership demographic with a rapid expansion of Latin American academics, and a substantial diversification of LASA's core institutional activities and commitments. Will the Association seize these opportunities, and continue—even accelerate—this trajectory of transformative growth? What do we want the LASA of 2030 to be?

The purpose of this document is twofold: to provide our members and their elected leadership the comprehensive and accessible budgetary information necessary to make informed decisions about the Association's future, and to lay the groundwork for appeals to friends of LASA—past, current, and future members and others inspired by our institutional goals—to support the agreed-upon transformative efforts with their time, critical engagement, and philanthropy. Both goals are served by the same basic exercise; the synthetic budgetary explanation that follows is meant to be reassuring to those concerned about institutional stability and inspirational for those focused on the social purpose of our diversified institutional projects. We want to make it clear that this transformative vision of Latin American studies will only be achieved through substantial expansion of the sources of Association revenues: from foundations and individual donors to new income-generating special initiatives (e.g., MaestroMeetings, cultural center rental space, etc.). Supporting Latin American academics who often struggle with significant unmet needs and building more collaboration across regions makes this revenue expansion particularly urgent.

The following narrative outlines the three basic components of the LASA budget; it is meant to be read alongside tables which provide the corresponding numerical summary.¹

¹ It should be noted from the outset that any summary of this sort requires a series of simplifying assumptions and glosses on underlying complexities in LASA's accounting and audit system. Those interested in further detail are encouraged to consult the Association website, where full audited budgetary information can be found. Although the snapshot provided here is in sync with that information, it varies slightly due to its synthetic and user-friendly character.

Table 1 presents the LASA endowment. The first two components of this table are straightforward: endowments built up gradually over the past two decades, with purposes that correspond to a combination of donor-established guidelines and LASA policy determined by the Executive Committee (EC). The portion of the endowment we call institutional projects is by far the largest of the three components.

According to EC-approved management guidelines—which follow standard good practice in this kind of endowment—only 5% of the value of the endowment can be regularly used every year;² the rest must be reinvested. This annual usable payout—also known as a “safe take”—appears as income in the next table (at the value of US\$210,886.28 in 2019), and is currently used for travel grants to the annual Congress and seed funds for two collaborative research projects each year (known as Ford Special Projects because the Ford Foundation was an original contributor to this fund).

Table 1: Endowment³

Value of Endowment Investments	2017	2018	2019
Institutional Projects	\$ 5,792,220.62	\$ 5,857,819.71	\$ 4,217,725.55
Endowed Awards	\$ 327,099.51	\$ 393,723.68	\$ 368,412.25
Operational Reserves	\$ 1,896,100.25	\$ 2,059,430.36	\$ 2,165,621.85
	\$ 8,015,420.38	\$ 8,310,973.75	\$ 6,751,759.65
Use of endowment funds			
"Safe take"	\$ 289,611.03	\$ 292,890.99	\$ 210,886.28
of which actually spent on Institutional Projects (Travel grants, research grants and FORD)	\$ 187,413.44	\$ 123,816.49	\$ 117,940.00
Awards	\$ 11,616.32	\$ 11,305.72	\$ 11,787.67
Purchase of Property	\$ -	\$ -	\$ 1,139,907.00

The second component, endowed awards, consists of a series of small endowments associated with each award that LASA bestows each year on a scholar, according to established guidelines. The full list of these awards, and their recipients, can be found [here](#). The full amount of the revenue from this portion of the endowment goes to the awards, as indicated in the expenses portion of the spreadsheet.

The third component of our endowment—called operational reserves—has a completely different purpose. It is constituted as a reserve fund that would allow LASA to function at normal levels for one year, in the event of emergency conditions that reduced or eliminated annual revenues. Best practices and legal requirements dictate that these reserves be kept at the same level as one year’s operating budget (in 2019, roughly US\$2.1 million). Given this purpose, the investment strategy for these funds must allow for greater liquidity than the principal endowment; this in turn means that annual return will always be much lower as well. This return (3.3% in 2019) is allocated in three distinct ways: US\$75K per year goes toward maintenance of the new LASA headquarters; the rest is reinvested back in the operational reserves until they reach the equivalent of the yearly budget; any surplus beyond this amount is allocated according to EC instructions.

² From the Endowment Fund guidelines: “In years when the Endowment’s return is 10 percent or greater, 5 percent may be taken in payout; in years when it is 8 percent to 9.9, 4 percent may be taken; and when the return is 7.9 percent and below, then 3 percent would be the maximum payout.... The actual amount of the annual payout is calculated as a percentage of the average market value of the portfolio for the preceding two years.” Following these investment policy guidelines, the “safe take” amount paid out from the endowment is 5% in years when the endowment’s return is 10% or greater—which has been the case in most recent years. At times, the safe take has not been used in its entirety because of the rate of actual participation of travel grantees. Those funds that are not used are reinvested, contributing to the growth of the endowment throughout the years and enhancing LASA’s stability.

³ The decrease in institutional projects from 2018 to 2019 is due to a large unrealized loss and the acquisition of the LASA property.

Table 2 summarizes the annual revenues that LASA takes in. The major sources of this revenue are from the membership fees (US\$843,418 in 2019) and those related to the Congress, especially registration (US\$1,097,126 in 2019). After membership and Congress, the next category is revenues that come from the investments described in the previous paragraph. The third category—fundraising—is relatively modest at present, but a very important focus of future revenue growth. Currently, fundraising accounts for only 2% of the annual revenue flow. The fourth category—sustainability projects—also corresponds to a crucially important series of activities for the future. Currently, LASA has one principal project of this sort—a meeting planning service called MaestroMeetings, which has separate 501(c)3 status and whose proceeds (US\$125,977 in 2019) go entirely to LASA, enhancing our activities. Additional projects of this sort are on the horizon, principally those related to the cultural center—still in conceptual stages—that will be housed in the newly acquired LASA offices (see Appendix 1). The total revenue for 2019, then, totals US\$2,526,863.

Table 2: Revenue⁴

Revenue	2017	2018	2019
Membership (inc. life membership)	\$ 840,757.00	\$ 850,524.00	\$ 843,418.00
Congress			
Registrations	\$ 852,626.00	\$ 1,348,110.00	\$ 1,097,126.00
Book Exhibit & Ads	\$ 80,641.00	\$ 84,625.00	\$ 120,415.00
Sponsorship	\$ -	\$ -	\$ 3,000.00
Usable Return from Investments			
From Operations	\$ -	\$ -	\$ -
From Endowment (safe take)	\$ 289,611.03	\$ 292,890.99	\$ 210,886.28
From Endowment (awards)	\$ 11,616.32	\$ 11,305.72	\$ 11,787.67
Fundraising	\$ 31,280.00	\$ -	\$ -
Grants	\$ 55,000.00	\$ 35,880.00	\$ 32,000.00
Donations from members + Cont. to Endowment	\$ 86,642.00	\$ 75,428.00	\$ 21,525.00
Sustainability Projects			
Meeting planning services	\$ 77,075.00	\$ 127,315.00	\$ 125,977.00
Cultural Center	\$ -	\$ -	\$ -
Other revenue (incl. royalties & subsidiary rights)	\$ 91,935.00	\$ 55,235.00	\$ 60,729.00
	\$ 2,417,183.35	\$ 2,881,313.71	\$ 2,526,863.95

Table 3⁵ charts annual expenses, in four categories (Membership and Services, Congress, Management and Governance, and Special Initiatives). It is important to note at the outset that salary costs are distributed across all four categories—with a rough calculation of how much work time LASA employees devote to each, expressed as a percentage of their total work time. The Secretariat currently has eight full-time and three part-time staff members and three external contractors, whose names and job descriptions can be found [here](#). Besides salaries, the other two expenses associated with membership and services are section and operational expenses. Section expenses include awards, travel grants, and special events organized by the 40 LASA Sections. Operational expenses are related to general expenses such as investment and bank fees, office equipment and supplies, telephone, membership and dues to other organizations, and so forth.

⁴ Revenue shows a steady decline in donations. This may be due to new tax regulations and other factors.

⁵ Total salary expense per year: 2017: \$656,939; 2018: \$992,694; 2019: \$978,573.

Table 3: Expenses⁶

Expenses	2017	2018	2019
Membership & Sections			
Salaries (20%)	\$ 124,817.00	\$ 196,337.00	\$ 194,506.00
Section Expense	\$ 46,234.00	\$ 74,695.00	\$ 69,811.00
Operational Expense	\$ 37,558.00	\$ 49,969.00	\$ 45,776.00
Congress			
Salaries (30%)	\$ 198,177.00	\$ 298,175.00	\$ 293,774.00
Travel Grants	\$ 295,406.00	\$ 193,470.00	\$ 146,274.00
Congress Operations	\$ 470,449.50	\$ 1,091,066.00	\$ 407,689.00
Operational Expense	\$ 39,029.00	\$ 47,056.00	\$ 42,427.00
Management & Governance			
Salaries (35%)	\$ 218,430.00	\$ 343,589.00	\$ 340,385.00
LASA Secretariat	\$ 204,248.00	\$ 77,734.00	\$ 48,692.00
Governance	\$ 92,778.50	\$ 147,281.00	\$ 69,840.00
Operational Expense	\$ 112,955.00	\$ 100,151.00	\$ 100,846.00
Fundraising	\$ 82,759.00	\$ 33,013.00	\$ 9,496.00
Special Initiatives			
Collaborative Research Grants	\$ 24,975.00	\$ 24,830.00	\$ 33,440.00
Open Access Publications			
Salaries (16%)	\$ 115,515.00	\$ 154,593.00	\$ 149,908.00
Direct publication expense	\$ 66,872.00	\$ 78,721.00	\$ 93,117.00
Operational expense	\$ 35,127.00	\$ 23,760.00	\$ 13,847.00
Cultural Center	\$ -	\$ -	\$ -
	\$ 2,165,330.00	\$ 2,934,440.00	\$ 2,059,828.00

A large portion of our annual expenses (equivalent to 81% of Congress registration fees) are associated with our core yearly activity, the Congress, where thousands of scholars (roughly 7,200 in 2018 and around 6,000 in 2019) from around the world gather for four days to engage in dialogue and exchange related to their research, activist, and policy work and creative activities on Latin America. Logistics for these Congresses require multiple prior site visits and extensive logistical work by at least half of the Secretariat staff before, during, and after the event. The “big ticket items” in Congress operations are meeting space rental and AV equipment. We are especially proud of the nearly US\$300,000 we spend on travel grants that allow attendance of LASA members with limited resources, with a special affirmative allocation for indigenous and Afro-descendant intellectuals. This kind of support has become increasingly important due to the growing national, ethnic, and racial diversity of our membership.

Management and governance is the third category of expenses. Beyond salary, these expenses are distributed between the basic daily operations of the Secretariat and the elected members of the LASA EC, whose transportation and other expenses are covered for two meetings, one midyear and one just before the yearly Congress. If we compare LASA to other organizations similar in size (American Political Science Association, American Anthropological Association, American Sociological Association, and Modern

⁶ Expenses show a decline in travel grants due fewer foundations contributing to the LASA travel grant program, a lower endowment, and the participants' cancellations including no-shows.

Language Association, LASA's salaries represent 34% of the total budget (2017–2019 median) while other associations spend 35%–41%. Also, the staff to member ratio for LASA is 1 staff for 1,404 LASA members, while other associations' ratios range between 1 staff for 409 members to 1 staff for 729 members.

The final item in this category—fundraising—is the Secretariat's investment in conjunctural and long-term efforts to increase the revenue flow from a range of sources, including foundations, individual members, and special activities.

The fourth category of expenses is special initiatives. These are activities that LASA has undertaken as an expression of its mission to advance the production and dissemination of Latin America scholarship, with an emphasis on the principle of horizontal, collaborative knowledge-power relations in these activities. The first item in this category is collaborative research grants (previously known as Ford Special Projects)—seed funding for two projects, awarded annually on a competitive basis. The second area here is open access publication—a central and growing LASA commitment to the principle that published scholarly material should be universally accessible on open web platforms. We are proud to have been early leaders in the implementation of this principle with the Association's core publications—Latin American Research Review and LASA Forum—and we are excited recently to have launched the Latin American Research Commons (LARC), which publishes scholarly work by Latin America-based authors. Finally, maintenance of the newly acquired LASA headquarters—estimated at US\$50K per year (beginning in FY 2020)—comes from the returns on investment of the operational reserves, as previously explained. We have exciting plans for the cultural center to be housed in this building, activities that will both advance the LASA mission and generate a modest revenue.

This synthetic presentation of LASA's budget and institutional commitments opens the way for deeper understanding of our fiscal foundations and also highlights a series of analytical points that will inform future deliberations. Here are a few:

- Membership fees alone do not cover the basic costs of putting on the yearly Congress. If it were not for Congress registration fees, LASA would lose money each year.
- Trends in LASA demographics, combined with the recently approved (and highly justified) “sliding scale” membership fee structure, yield a declining portion of Congress costs that will be covered by this source of revenue. Higher Congress numbers can partially offset this deficit, but with other consequences that need to be taken into account.
- Registration fees, after covering the shortfall in Congress costs, have been a principal source of revenue over the years that covers other LASA expenses (especially management and governance), and that has been added incrementally to the endowment.
- This endowment, in turn, is the only reliable source of funds for LASA's special projects, especially the travel grants. However, the need for travel grants has increased exponentially with the demographic trends in LASA membership, which have generated both higher absolute numbers and an increasing percentage who need this assistance. As an example, LASA received 455 travel grant requests in 2004 (supporting 46% of valid requests or 5% of the entire LASA membership) and 2,457 in 2018 (supporting 47% of valid requests or 17% of the entire LASA membership). Adjustments to the travel grants program were implemented throughout the years to maintain similar levels of support. This need for additional travel grants is one of our principal fundraising objectives—both with foundations and with the check-off option for individual members.

- The operational reserves of US\$2.17 million (in 2019) cannot be counted on to yield full investment returns, given the need for immediate liquidity. It is reasonable to expect a maximum 3% return, or about \$67,500 per year. This yearly return goes mostly to the yearly maintenance allowance for the new LASA headquarters. Consequently, while these funds have a crucial function, it is most accurate not to think about these funds as endowment proper.
- LASA's finances currently are bedrock sound. However, in order to plan for the fiscal consequences of membership demographic trends noted above, to increase the amounts devoted to institutional projects (travel grants, collaborative research grants, open access publication, etc.) and to seed new initiatives on the horizon, we need to increase our revenue flow. Given our core commitment to accessibility, this increase cannot be expected to come from either membership or registration fees. This leaves three possibilities:
 1. Expansion of the institutional projects portion of the endowment. This in many respects is the gold standard. Such contributions increase the permanent yearly "safe take," used according to EC priorities. The principal sources of these contributions to date are Life Memberships, pledges to the Kalman Silvert Society, and the occasional infusions of surplus returns on investment of our operational reserve. You can learn more about the Kalman Silvert Society [here](#).
 2. Special revenue-generating projects. This is an extremely promising and innovative dimension of LASA's institutional strategy, developed over the past decade. The LASA Secretariat acquires expertise related to its core institutional functions, which in turn spins off service-providing activities for which third parties pay. The leading example here is MaestroMeetings; multiple uses of the LASA headquarters will be a future source. We commend the Secretariat for taking leadership in this realm. Income from the cultural center—mainly space rental—would be another important source of income to continue the support of LASA's current and new projects.
 3. Grants or donations that go directly to the special project or initiative in question. The best example here is travel grants (from direct donations); though the majority of these funds has come from endowment returns, members and foundations have contributed as well. Another example is the Otros Saberes project, which in its heyday raised large sums expressly for that project's use. Also, special fundraising efforts at times have met with substantial success—the best example here is the 50th anniversary gala in 2016. However, inflow for other special initiatives such as LARC has been small to nil. The EC agreed to support LARC at a bare-bones level with the savings from not printing and mailing the LARR journal (a total of roughly \$50,000), but expansion would require an infusion from outside LASA coffers.
- These three sources of revenue each have associated activities, on which the LASA Development Committee provides strategic advice and which the Secretariat executes. We need to amplify these efforts considerably if we are to seize the opportunity and realize the full promise that lies ahead, fully in view from the crossroads where we currently stand.

Appendix A: LASA's Property History

The decision to purchase a LASA property

From 2002 to 2010, as LASA grew from 3,000 to 10,000 members, its activities also expanded. The decision was made to publish the Latin American Research Review (LARR) as an open access publication, and other new initiatives were established. Given this exponential growth, it became apparent that there was a need for physical space to accommodate the growing LASA staff. At the same time, the LASA Executive Council (EC) made it a priority to take actions that would ensure LASA's logistical effectiveness and independence, or at the very least to ensure the organization would have suitable physical space for its current and future needs.

On July 25, 2011, at the conclusion of a long conversation about LASA's growth and future, the LASA Executive Council approved the following action:

LASA will take \$500,000 from the Endowment Fund to create a contingency/ building fund and add \$25,000 per year from operations to build the fund.

Participants at that meeting were:

President Maria Hermínia Tavares de Almeida; Vice President Evelyne Huber; Past President John Coatsworth; Treasurer Cristina Eguizabal; EC members Roberto Blancarte, Gwen Kirkpatrick, Kimberly Theidon, Rosalva Aida Hernandez Castillo, Maxine Molyneux, and Gioconda Herrera; LASA2012 Program Co-chairs Timothy J. Power and Gabriela Nouzeilles; and LARR Editor in Chief Philip Oxhorn.

The rationale was that this fund would be developed to 1) purchase a building that would constitute LASA's headquarters; and 2) to serve as a contingency fund, should the need arise.

The search for a suitable property began, and in 2011, Past Presidents John Coatsworth and Evelyne Huber took time out of their busy schedules to visit Pittsburgh on different occasions to evaluate a few properties that seemed potentially suitable for LASA's

needs. At that time, however, none of the available properties were considered suitable. The consensus was that any building purchase should also constitute a wise investment for the organization. The property should not only solve the existing and pressing physical needs for space but also have the potential to generate income and experience strong future market appreciation.

The search continued throughout the years, moving forward in 2016-2017 in conjunction with the development of the 2016-2020 Strategic Plan under President Gil Joseph. "Managing Growth" was one of the pillars that resulted from said plan, among three other areas. That strategic plan can be consulted at: https://lasaweb.org/uploads/2016-2020-lasa-strategic-plan_002.pdf.

The purchase of the building

The need for space resurfaced dramatically as a serious problem hindering LASA's growth. While LASA maintained the highest membership to staff ratio in the industry, LASA's team had grown from the original three permanent and two part-time staff (in 2001) to six permanent and seven part-time staff members in 2017. Also, the execution of the strategic plan required the implementation of additional initiatives. While LASA has maintained strong ties with the University of Pittsburgh since 1986, and there has been desire by both parties to maintain the relationship, the University has also faced its own serious lack of physical space and therefore could not make additional space available to LASA.

At the end of 2017, a suitable property for LASA became available in the Pittsburgh market during Aldo Panfichi's presidency. As due diligence, comparative properties were examined in two other cities so LASA could compare and contrast the alternatives. The LASA team prepared a very detailed analysis of the alternatives and the EC ultimately decided to pursue the Pittsburgh property.

The Executive Council (EC) unanimously approved pursuing the purchase of the Pittsburgh property at its meeting in December 2017. Participants at this meeting were:

LASA President Aldo Panfichi; Vice President/ President-Elect Lynn Stephen; Past President Joanne Rappaport; Treasurer Patricia Tovar Rojas; Incoming Treasurer Diego Sánchez-Ancochea; Executive Director Milagros Pereyra; Executive Council members Jo-Marie Burt, Claudia Ferman, Daniela Spencer, Angela C. Araújo, Barbara S. Weinstein, and Ginetta E. Candelario; LARC Co-editor Philip Oxhorn; LARR Editor in Chief Aníbal Pérez-Liñán; and Strategic Plan Oversight Committee members Gil Joseph and Tim Power.

Negotiations began in early 2018. During negotiations, which took longer than expected, the Executive Council held its midterm meeting in Pittsburgh in December 2018. Those members who were able to travel to Pittsburgh (some joined remotely) had the opportunity to visit the property. At that meeting were Lynn M. Stephen, President; Mara Viveros-Vigoya, Vice President; Diego Sánchez-Ancochea, Treasurer; EC members Barbara Weinstein, Ginetta E. Candelario, and Emiliana Cruz; Vivian Andrea Martínez-Díaz, student representative; and Ex-officio members: Strategic Plan Oversight Committee member Tim Power; LASA2019 Program Co-chair Carlos Aguirre; LARR Editor-in-Chief Aníbal Pérez-Liñán; and LARC Co-editor Phil Oxhorn.

Negotiations continued throughout 2018 and finally concluded on September 5, 2019, when LASA was able to secure the purchase of the property. It was a lengthy and exhausting process for all involved but LASA was finally able to make it happen. The negotiation was worthwhile; LASA was able to purchase the building at a reduced price in cash (from the original price of 3.95 million to the final price of 2.35 million), using only a fraction of the contingency fund it had established. A portion of the savings from the purchase price will be used to prepare the property for offices, cultural center, and rental space. Furthermore, the property—given its prime location and highly favorable acquisition price—has the potential to become an investment that can pay for itself in the long term by providing a much higher rate of return than traditional investments.

The LASA property

The property was designed by the architectural firm Ingham and Boyd of Pittsburgh and built in 1912 for the Historical Society of Western Pennsylvania, which used it as a library and museum. In the 1990s, it was sold to a private owner who invested a significant amount of funds to renovate the property and restore it to its former glory. A few years ago, the renovation of this property obtained the Historic Preservation Award given by the City of Pittsburgh Historic Review Commission. Its location is superb, situated only one block away from the University of Pittsburgh's Cathedral of Learning. Its proximity to the University, the hospitals of UPMC, and several outstanding museums ensure that it will always be a very desirable property.

The opportunities ahead

In keeping with LASA's mission "to foster intellectual discussion, research, and teaching on Latin America, the Caribbean and its people throughout the Americas, promote the interests of its diverse membership, and encourage civic engagement through network building and public debate," LASA has begun exploring the possibility of using part of its new headquarters as a space (physical and virtual) that will be open to the wider public for art and historical exhibits, film screenings, performances, lectures, and so on. Because the building is already designated for use as a museum/cultural center, LASA will be able to save money, time, and other resources by using the current operating license rather than meeting the requirements for a commercial one.

Conclusion

LASA now owns a historic property located near the University of Pittsburgh campus; the opportunities that this acquisition offers are in many ways unlimited. This property will not only become the main headquarters of the Association but, as originally envisioned, constitutes a sound investment by the Association. The building can also be used for other purposes, such as a cultural center/museum and to showcase LASA activities to a broader public. It will be used, as well, for other income-generating purposes that will be shared with the membership as part of the 2016–2020 Strategic Plan. //

María Lugones, feminista descolonial, diaspórica y peregrina

por **Mariana Favela, R. Aída Hernández Castillo, Verónica López Nájera, Margara Millán, Mariana Mora y Meztli Yoalli Rodríguez** | La Red de Feminismos Descoloniales

El 14 de julio pasado murió María Lugones, filósofa desterritorializada, diaspórica, peregrina,¹ inspiradora de los feminismos descoloniales y crítica acérrima de los universalismos y de las múltiples violencias de la colonialidad-modernidad. En medio de la pandemia del COVID-19 que ha puesto en evidencia el fracaso del proyecto colonial moderno tan cuestionado por la obra de María Lugones, partió sin que su alumnado, colegas, camaradas de lucha, pudieran acompañarle con los ritos funerarios y el amor que se merecía. Sirvan estas palabras, escritas a muchas manos, como una despedida y un reconocimiento a la inspiración que compartió con los feminismos descoloniales.

Nacida en la pampa argentina, se convirtió en ciudadana del mundo cuando migró a los Estados Unidos, en la década de los sesenta, a estudiar filosofía y ciencias políticas en la Universidad de Wisconsin en Madison. En pleno auge de los movimientos de derechos civiles y antirracistas, la influencia de los feminismos afroamericanos y chicanos, la llevó a reflexionar sobre un tema tabú en América Latina: los racismos criollos y mestizos que actualizaban cotidianamente las violencias coloniales en el continente.

Sus críticas al multiculturalismo y a los feminismos hegemónicos (Lugones 2005), vinieron a develar la manera en que las políticas de identidades estaban siendo apropiadas por el proyecto de la colonialidad-modernidad, despojándolos de su radicalidad política. Su pensamiento incomodaba no solo a los reproductores del *status quo*,

sino también a quienes, desde el liberalismo y el neoliberalismo, se habían acomodado y reproducido la colonialidad del género y del saber.

A pesar de su sólida formación como filósofa, que se refleja en su denso pensamiento teórico, su feminismo era un feminismo enraizado, con los pies en la tierra, a donde regresaba periódicamente en sus recorridos por Bolivia y Argentina. Su trabajo en educación popular con población latina en los Estados Unidos, la acercó a los racismos cotidianos y exclusiones que viven las llamadas “mujeres de color” en ese país, con quienes se identificó.

Abrevó del llamado Grupo Colonialidad-Modernidad, pero a la vez cuestionó las ausencias analíticas en torno a la violencia patriarcal de sus teorizaciones. Retomando el concepto de ‘colonialidad del poder’ del sociólogo peruano, Aníbal Quijano, María Lugones escribió su artículo “Colonialidad y género: hacia un feminismo descolonial” (2008), uno de sus textos más conocidos e influyentes, en el que argumenta que el ‘género’ al igual que la ‘raza’ son constituyentes del patrón colonial de poder-saber. Su radicalidad crítica vino a desnaturalizar el dimorfismo sexual y el heterosexualismo, señalándolos como parte de las construcciones culturales fundantes de la dominación capitalista eurocentrada. María Lugones logró captar la importancia y al mismo tiempo ausencia en la propuesta de la colonialidad del poder. Para Lugones es necesario complejizar la ecuación planteada por Quijano, hablando de ‘niveles de humanidad’ y procesos históricos de racialización de los cuerpos. Con este ejercicio, Lugones planteó que el sistema de género tiene

¹ El concepto de peregrinaje fue fundamental en las teorizaciones sobre las opresiones múltiples desarrolladas por María Lugones ver *Pilgrimages/Peregrinajes: Theorizing Coalition against Multiple Oppressions* (Lanham, MD: Rowman and Littlefield, 2003).

un lado claro/visible y un lado oculto/oscurito que es resultado de una construcción “diferencial del género en términos raciales” (2008, 99).

Para ella, la descolonización necesariamente implicaba confrontar los binarismos sexuales y las violencias heteronormativas. En la búsqueda de otras formas de ser y estar en el mundo se acercó a las culturas quechuas y aimaras en Bolivia y buscó entender conceptos como el chachawarmi (Lugones 2012). En sus cruces de fronteras identitarias, étnicas y geográficas, se acercó a las feministas bolivianas y mexicanas y nos propuso crear un espacio de diálogo para compartir nuestras maneras de entender los feminismos y la descolonización. A través de Sylvia Marcos, otra cruzadora de fronteras por excelencia, nos convocó para construir puentes políticos y teóricos entre México, Bolivia y Estados Unidos.

Fue a partir de una invitación suya, que encontré eco en la energía política de Sylvia Marcos, que iniciamos encuentros como Red en el Centro de Tlalpan de la Ciudad de México en un verano del 2008. Con María mantuvimos encuentros virtuales a través de videoconferencias y, finalmente, en julio de 2009 nos reunimos con ella después de las sesiones del Congreso de Americanistas, realizado en la Universidad Iberoamericana. Estos primeros diálogos fueron el inicio de nuestro espacio colectivo que hace doce años bautizamos como la Red de Feminismos Descoloniales.

A través de su obra inspiró muchos de nuestros debates académicos y políticos. Pudimos constatar que María Lugones solía presentarse con la multiplicidad de capas experienciales que componían su biografía; el conocimiento situado y la experiencia encarnada, ambas perspectivas metodológicas que contribuyó a desarrollar, tomaban forma en esa enunciación siempre llena de referentes a su propio lugar de subordinación y de agencia. Son muchas las aportaciones de su palabra, el legado de su obra nos deja una serie de conceptos que son teórico-políticos, porque Lugones, siendo educadora popular, pensaba en la teoría-acción, en una academia implicada; inmersa en el movimiento de las “mujeres de color”. Por ejemplo, su revisión histórica del campo de género y colonialidad, no podía separarse de las

necesidades de pensarnos dentro de la diversidad interseccional. La importancia de su mirada, expresada claramente en su texto *Colonialidad y Género* (2008) —que dentro del campo de los estudios decoloniales en América Latina y, por supuesto, también en el mundo anglosajón— fue muy relevante, ya que visibilizaba un vacío dentro de lo que hasta entonces se entendía como la colonialidad del poder. Sin embargo, es en sus trabajos previos donde encontramos un referente para la actualidad que habitamos, en este último tiempo de efervescencia de los movimientos feministas y de mujeres en prácticamente todo el mundo. Se trata del término ‘coalición’ desarrollado en su texto en *Pilgrimages/Peregrinajes: Theorizing Coalition against Multiple Oppressions*, publicado en el 2003. En este escrito Lugones nos ofrece un conjunto de conceptos que trabaja desde la experiencia de la opresión, dibujando un sujeto activo, capaz de desarrollarse en “múltiples mundos”. La ‘subjetividad activa’ es central para un modelo alternativo de sujeto, que no es el sujeto de la agencia liberal individual, y que tampoco está dado por la pertenencia a una comunidad. En el texto “Hacia metodologías de la decolonialidad” (2015), Lugones refiere que “mujeres de color” es un término coalicional, y nos explica el sentido que le da a esa estrategia metodológica que es a la vez política:

Uso la frase “mujeres de color” no como un marcador de identidad, sino como un logro. Nos llamamos de esa manera para utilizar un término de coalición que cruza y desafía la fragmentación en grupos racializados, concebidos como cerrados e impermeables por la colonialidad capitalista moderna. “Mujeres de color” abarca a aquellas que abrazamos las diferencias como un fondo de posibilidades. El término incorpora a las mujeres que rechazamos la exclusión teórico-práctica que el feminismo hegemónico blanco ha hecho de la raza y el racismo. “Mujeres de color” es un término coalicional, que incluye a las mujeres negras, afroamericanas, afrocaribeñas, afrolatinas, asiático-americanas, indígenas, nativas, indocaribeñas, chicanas, boricuas y otras mujeres subalternas en los Estados Unidos que tienen una historia colonial y un presente de colonialidad. También incluyo a las mujeres

que nos movemos en las arenas del feminismo transnacional, el feminismo del Tercer Mundo y lo que llamo el *feminismo decolonial*. (Lugones 2008, 76)

Cruzar y desafiar la fragmentación que nos es impuesta, desde y a partir de nuestras múltiples opresiones, reunirnos desde diferentes feminismos, todos ellos, diríamos, *de abajo y a la izquierda*, es uno de los retos más urgentes que tenemos en la crisis del tiempo presente. Para María Lugones, esto era parte de las “epistemologías de frontera”,

que sirvan para cruzar mundos, y no en epistemologías de encrucijadas y fragmentación. Pienso en pedagogías del cruce y en una erótica social. Pienso en comunidades de camaradas solidarias, comunidades donde la solidaridad horizontal está acompañada por un compromiso de aprendernos las unas a las otras. Quiero pensar sobre estas ideas no como reflexiones académicas, sino como los pensamientos de miles y miles de mujeres en los últimos treinta y pico de años, en una variedad de redes que han incluido el taller como una herramienta profunda de conexión y reconocimiento, las marchas, los encuentros, los seminarios, los congresos, los foros, las cumbres, las organizaciones comunales. La teoría en estas redes de movimientos ha sido siempre práctica, comunal, con base en el diálogo y elaborada desde la afirmación de la vida dentro de un nosotros heterogéneo y comprometido. (Lugones 2008)

El tiempo presente está urgido de esas metodologías políticas que sepan reconocer las teorizaciones de los movimientos y que ayuden, gozosamente, a formar coaliciones desde y por nuestras diferencias.

Con este texto queremos honrar su memoria y reconocer la manera en que nos inspiró como Red de Feminismos Descoloniales, así como a muchas otras feministas alrededor del mundo, ya que sus palabras nombraron viejas incomodidades de las discusiones que planteaba el feminismo hegemónico. Una de estas incomodidades es la lectura del concepto de género que se hace desde los feminismos liberales. El concepto de

género, entendido como un sistema, ha servido en términos generales para plantear que este sistema produce la desigualdad entre hombres y mujeres. María retoma esta definición desde su experiencia militante con mujeres negras y chicanas en los Estados Unidos y sus coaliciones con mujeres diversas de América Latina, para abrir una discusión muy poderosa sobre la propia categoría de género.

En el texto sobre la colonialidad y género antes citado, Lugones articula las teorías de la colonialidad del poder y la interseccionalidad, con las cuales problematiza y profundiza en los análisis de la teoría de género. Para Lugones, existe evidencia histórica de que el género es una invención colonial que no existía en las culturas anteriores a la modernidad capitalista colonial o, por lo menos, no se conformaba sobre la misma matriz de opresiones, como lo hará en la modernidad capitalista. A este sistema lo nombra ‘sistema colonial de género’. En ese sentido argumenta que no es posible buscar una “construcción no colonizadora de género” dado que la categoría de género en sí ya es una construcción colonial, en el mismo sentido que tampoco existe la noción de una “mujer colonizada” dado que “ninguna hembra colonizada es una mujer” (Lugones 2011). Así, al incorporar la lectura desde la colonialidad del poder en el análisis de las causas de la opresión de las mujeres, Lugones abre una veta de discusión y propone que desde los feminismos descoloniales se pueden generar estrategias de resistencia antirracista que reanudan “nuestro compromiso con la integridad comunal en una dirección liberatoria” (2008). Para ello, es necesario un ejercicio de conocimiento entre mujeres a través de las coaliciones que emergen del re-conocimiento de y con las otras como parte de un “resorte relacional subjetivo/ intersubjetivo” (2011). Aquí la posibilidad de lo descolonial dado que esa tensión impulsa una creatividad oposicional al interior de la colonialidad/modernidad desde diversos “locus fracturados”, espacios doblados que existen en fricción constante, y que son capaces de crear otras formas de ser.

Insistía que el comienzo de lo descolonial reside en una praxis que denomina infrapolítica, como un ejercicio de lo político volteado hacia dentro,

íntimo, entendido no desde lo sexual, ni mucho menos en la esfera privada separada de la pública, sino entre personas que no están actuando en calidad de representantes de otros.

En su ensayo "Playfulness, 'World'-Traveling and Loving Perception" (1987), a partir de una autobiografía, Lugones señala la necesidad de viajar a los mundos de otras mujeres de color, para construir un feminismo plural, "Recomiendo que afirmemos este viajar a través de 'mundos' como parte constitutiva de la transculturalidad. Recomendando a las mujeres de color en los EE.UU. que aprendamos a amarnos al aprender a viajar a los 'mundos' de cada una" (Lugones 1987, 4).

Viajar a otros mundos para conocernos íntimamente pero también para vernos reflejadas en los mundos de las otras. Es una invitación a abrirnos y reflejarnos, es una apuesta para la descolonización que no se limita a criticar el sistema moderno colonial y que comprende la importancia de la relacionalidad para tejer coaliciones. Desde su legado, nos inspira a viajar a los mundos diversos para reconocernos, para seguir caminando juntas en las diferencias y los espejos, para descolonizar la imaginación y construir otros mundos posibles.

Referencias

Lugones, María

1987. "Playfulness, 'World'-Traveling and Loving Perception". *Hypatia* 2 (2): 3-19.

2003. *Pilgrimages/Peregrinajes: Theorizing Coalition against Multiple Oppressions*. Lanham, MD: Rowman and Littlefield.

2005. "Multiculturalismo radical y feminismos de mujeres de color". *Revista Internacional de Filosofía Política* (Universidad Autónoma Metropolitana Iztapalapa), Núm. 25: 61-76.

2008. "Colonialidad y género: Hacia un feminismo descolonial". *Tabula Rasa* (Bogotá), núm. 9 (julio-diciembre): 73-101.

2011. "Hacia un feminismo descolonial". *Revista La Manzana de la Discordia* 6, núm. 2: 105-119. https://hum.unne.edu.ar/generoysex/seminario/s1_18.pdf.

2012. "Hacia una lectura decolonial del chachawarmi". En *Anales de la Reunión Anual de Etnología* 23:152-158.

2015. "Hacia metodologías de la decolonialidad". En *Prácticas otras de conocimiento(s): Entre crisis, entre guerras*, tomo 3, 75-92. México: Cooperativa Editorial RETOS; Taller Editorial La Casa del Mago; CLACSO. //

Rememorando a María Lugones

por **Sylvia Marcos**, Integrante de la Red de Feminismos Descoloniales

Conocí a María Lugones en los ambientes filosóficos feministas de los años ochenta. La leí, y la encontré en la Universidad de Harvard y en las tempranas reuniones feministas en Argentina. Como gran pedagoga, la escuche, recuerdo, durante un largo viaje en autobús desde Buenos Aires a la ciudad sureña de San Bernardo en la región de donde ella era originaria, y en donde tuvo lugar ese encuentro feminista a inicios de los noventa (en noviembre de 1991). Ella elaboró todo un monólogo/diálogo estilo Platón con la compañera que estaba sentada a su lado. Conceptos complejos que sabía desgranar y explicar durante ese viaje de horas. Su tono de voz nos permitió a todas las ocupantes del autobús, seguir sus argumentos filosóficos que hacían, con la buena calidad de la mayéutica, que sus preguntas lograran que sus escuchas descubrieran en sí mismas conceptos feministas que estaban latentes u ocultos en sus mentes. Esa experiencia escuchándola dejó la base de quien era esa señora filósofa feminista que sabía discurrir con esa tan amplia gama de feministas, la mayoría en ciernes, que viajábamos junto a ella.

María Lugones ha sido, para mí, la gran pensadora feminista que supo filosofar como feminista ingresando y construyendo desde los espacios filosóficos tanto del continente africano como, y sobre todo, de América Latina. Sus contribuciones para el pensamiento descolonial feminista son fundamentales y fundacionales. La cito con frecuencia y no requiero muchas palabras para exponer y exaltar lo profundo de sus contribuciones.

Ella escribió todo en síntesis. No ha escrito y publicado veinte libros, ni cientos de artículos. Nunca ha caído en ser verbosa, aunque a veces los textos que son así, parecen amables para lectoras feministas ya suscritas y enmarcadas en el pensamiento universal feminista. Su último libro *Gender and Universality* es un testamento

metodológico que guía a futuro aquellos pensamientos que buscan la descolonización y des imbricación de pensamientos colonializantes universalizantes, aun siendo feministas.

Así fue como nos volvimos a encontrar al invitarme ella, al salir mi libro *Tomado de los labios: Género y eros en Mesoamérica*, para dar un seminario doctoral en el Center for Interdisciplinary Studies in Philosophy en Binghamton University (2007). Desde entonces, han sido años de múltiples encuentros de compartir presentaciones en seminarios, Congresos de Americanistas, y Congresos de la Caribbean Philosophical Association, y de ella presentar en el Congreso en Kingston Jamaica todo un seminario dedicado a extraer de ese libro, sintético, como yo lo soy también, las propuestas profundas y filosóficas descoloniales que no son de fáciles de extraer a lectoras de otras disciplinas. En 2008, María me invito a formar en México uno de los cuatro proyectos de feminismo descolonial: Bolivia, California, Binghamton y México. Y aquí estamos escribiendo nosotras, sobre nuestra relación con ella.

María además de una gran teórica y filósofa, ha insistido frecuentemente, “como mujer de color”, de diáspora y que emigró tempranamente a los Estados Unidos, en su lugar de enunciación. La recuerdo, cada verano, tenía compromisos activistas de la llamada “educación popular” (que en su caso era el uso del método de la mayéutica), con grupos de mujeres migrantes, latinas en Nuevo México. Compromiso, que para ella era vital, tan o más importante que sus cursos en la universidad al lado de Aníbal Quijano e Immanuel Wallerstein. Su trabajo era dedicado y comprometido políticamente. Justamente lo acaba de reconfirmar en su último libro.

La lógica de la interseccionalidad es necesaria para dar paso a la lógica de la fusión, de la trama, de la emulsión. “Mientras la lógica de la intersección deja intacta la lógica de las categorías, la lógica de la fusión las destruye” asegura Lugones. Así su propuesta es arribar a la coalición y no permanecer en la lógica de la interseccionalidad que está basada en la lógica de la identidad. Ella propone no solo vivir la “diferencia colonial”, sino “engage in decolonial coalition”: comprometerse en la coalición descolonial.

Toda su vida y reflexiones son a la vez personales y políticas. Habría que haber experimentado la cercanía personal con ella para entenderlo y haberlo vivido, y al mismo tiempo ante la emergencia del pensamiento descolonial crítico, cuando ella hacía alguna pregunta que podía pasar desapercibida, esta contenía el rejuego filosófico.

Gracias María por tu legado que fundamenta nuestras luchas por descolonizar el imaginario feminista. //

Ivan Schulman, hispanista de raigambre martiana

por **Pedro Pablo Rodríguez**

El fallecimiento, lunes 3 de agosto, de Ivan A. Schulman obliga a quienes le conocimos a compartir algunas ideas y sentimientos, en espera del estudio amplio y detallado acerca de su labor profesoral y como investigador de las letras hispanoamericanas.

Fue discípulo de Manuel Pedro González, aquel español impulsor de los estudios de la literatura de nuestra América, que fuera su tutor para la tesis de doctorado en Lengua y Literatura Hispánicas por la Universidad de California (UCLA). Desde esos estudios Schulman quedó enamorado para siempre de la obra y las ideas de José Martí, lo cual motivó su primera estancia de estudios en Cuba, en plena juventud. A partir de entonces, desarrolló una impresionante carrera en los ámbitos académicos, en la que Martí no solo fue el centro de sus empeños como *scholar*, sino que, como suele sucedernos a todos, el Maestro se convirtió en una fuerza moral que guió su conducta. No por gusto, más de una vez afirmó que había necesidad de hacer conocer el pensamiento del cubano universal en su país, como acicate moral para afrontar sus problemas, a la vez que insistió en que no hubo durante el siglo XIX otro extranjero tan conocedor y preocupado por la sociedad norteamericana como el cubano.

Fue Schulman un entusiasta difusor de las ideas y la creación martianas, lo mismo en las aulas universitarias que en sus libros y artículos. Muchos de los estudiosos de Martí de los últimos cuarenta años en Estados Unidos recibieron su estímulo, su consejo, su guía académica. Fue, sin dudas, el más destacado de su país en el campo de los estudios martianos y del modernismo hispanoamericano.

Impartió clases de lengua y literatura hispánicas en numerosas instituciones de educación superior: Washington University, University of Michigan, University of Florida (en la cual asumió la dirección del Centro de Estudios Latinoamericanos), la Universidad Federal de Rio de Janeiro, la Universidad de Buenos Aires, University of Illinois, Florida International University, University of South Florida y Middlebury Spanish School. La de Illinois, en Urbana-Champaign, lo declaró Profesor Emérito. El Centro de Estudios Martianos le entregó su distinción "Pensar es servir" y el Ministerio de Cultura de Cuba la nombrada "Por la Cultura Nacional". La Universidad de La Habana le otorgó la condición de Profesor de Honor, en Venezuela recibió la Orden Andrés Bello, y la Universidad Nacional de Managua, lo distinguió como Profesor Honorario.

Además de numerosos artículos en libros y revistas académicas, publicó catorce libros, buena parte de ellos de temática martiana. Varios son inexcusables en la bibliografía fundamental sobre Martí y el modernismo en la América Hispánica: *Símbolo y color en la obra de Martí*; *El modernismo hispanoamericano*; *Martí, Darío y el modernismo*; *El proyecto inconcluso: la vigencia del modernismo*; *Relecturas martianas: narración y nación*; *Vigencias: Martí y el modernismo*; *Painting Modernism*. Su compilación titulada *Nuevos asedios al modernismo* supo reunir a un grupo de autores que entonces daban nuevos aires a esa temática. La mayor parte de sus textos los escribió directamente en español.

Su relación con Cuba y los académicos cubanos fue constante, cálida y favorecedora del intercambio por encima de las medidas del bloqueo de los gobiernos nortños. Propició con sistematicidad la presencia de estudiosos de la Isla en universidades

y congresos científicos en territorio estadounidense. Supo mantener esa digna postura a pesar de ataques y medidas en su contra en más de un caso.

Para los investigadores del Centro de Estudios Martianos fue un compañero más que aportó opiniones, escritos suyos y de otros, felicitaciones por nuestros logros y premios. Por eso, a pesar de que sabemos que no lo veremos más físicamente ni que recibiremos nuevos textos suyos, Ivan A. Schulman seguirá a nuestro lado en la hermosa y necesaria tarea de difundir las ideas martianas para un mundo mejor.

Nació en Brooklyn, Nueva York, el 4 de octubre de 1931. Fue un estadounidense de estatura continental y de valores universales. //

COUNCIL *on*
FOREIGN
RELATIONS

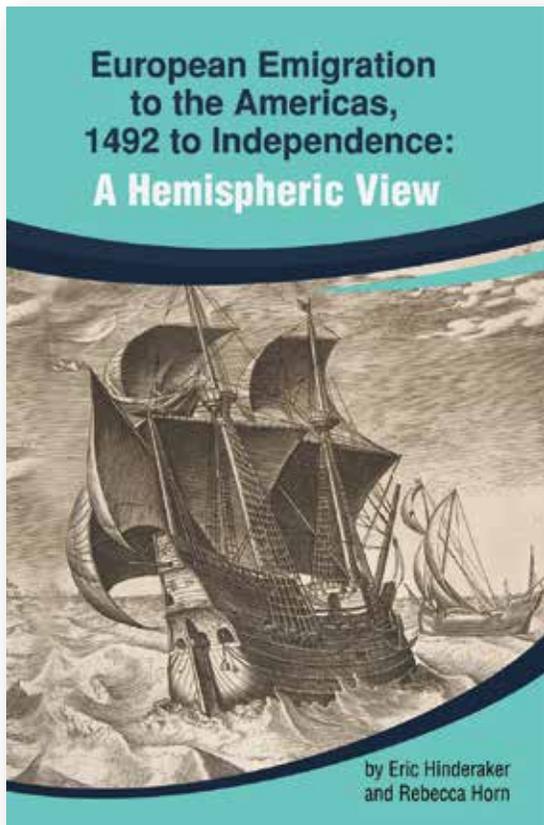
International Affairs Fellowship for Tenured International Relations Scholars

Faculty from a variety of academic backgrounds can take advantage of their sabbatical year gaining hands-on experience in the foreign policymaking field.

Apply online now through October 31, 2020

Visit cfr.org/fellowships or contact tirs.fellowships@cfr.org.

New AHA Booklet



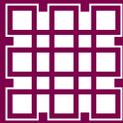
European Emigration
to the Americas,
1492 to Independence:
A Hemispheric View
ERIC HINDERAKER
AND REBECCA HORN

Designed for high school
and college classrooms

historians.org/booklets

Members receive 30% off all AHA publications

AMERICAN
HISTORICAL
ASSOCIATION



LATIN
AMERICAN
STUDIES
ASSOCIATION

The Latin American Studies Association (LASA) is the largest professional association in the world for individuals and institutions engaged in the study of Latin America. With over 12,000 members, over 65 percent of whom reside outside the United States, LASA is the one association that brings together experts on Latin America from all disciplines and diverse occupational endeavors, across the globe.

www.lasaweb.org